

DISTORSIONES PRODUCTO DE LA CRIMINALIDAD EN VENEZUELA





ÍNDICE

DISTORSIONES PRODUCTO DE LA CRIMINALIDAD EN VENEZUELA

Distorsiones de las economías ilícitas: Impacto en la institucionalidad en Venezuela	3
I. Ventajas para los ilícitos producto de cambios institucionales	6
1. Poder Judicial	7
1.1 Decisiones contra la independencia, autonomía y capacidad del sistema de justicia	7
1.2 Situación del sistema de justicia y consecuencias de su afectación	10
2. Rol de la Fuerza Armada Nacional	12
2.1 Políticas vinculadas al rol de la Fuerza Armada Nacional y su especial responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico	12
2.2 Consecuencias de las políticas relacionadas con el rol de los militares	13
3. Incremento de poder, opacidad y disminución de controles	14
3.1 Políticas que favorecieron el control del poder del Ejecutivo, la opacidad y la disminución de contrapesos	14
3.2 Consecuencias de las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo venezolano	17
4. Empresas propiedad del Estado. Petróleos de Venezuela SA - PDVSA	19
4.1 Políticas que han afectado a Pdvsa	19
4.2 Consecuencias de las políticas públicas relacionadas con Pdvsa	19
5. Políticas en fronteras y manejo de bandas	20
5.1 Políticas destacadas en zonas fronterizas	20
5.2 Consecuencias de las políticas en zonas fronterizas	21
2 Distorsiones de las economías ilícitas	22
Bolívar: las caras del dominio criminal	24
Distorsiones instituciones	25
Distorsiones económicas	27
Distorsiones políticas	29
Distorsiones sociales	30
Distorsiones culturales	31
Zulia: narcotráfico, la confluencia de la complicidad, el poder y el control social	34
Distorsiones instituciones	35
Distorsiones económicas	39
Distorsiones políticas	43
Distorsiones sociales	44
Distorsiones culturales	47
Sucre, entre el auge de la trata y los territorios entregados al narcotráfico	49
Distorsiones instituciones	50
Distorsiones económicas	52
Distorsiones sociales y culturales	53
Conclusiones	55



DISTORSIONES DE LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS: IMPACTO EN LA INSTITUCIONALIDAD EN VENEZUELA

En una investigación realizada entre los años 2020 y 2021, Transparencia Venezuela identificó que Venezuela es foco de actividades económicas y negocios ilícitos de grupos criminales que operan a escala local e internacional y cuyos principales hallazgos se consignaron en el documento *Economías ilícitas al amparo de la corrupción* (Transparencia Venezuela marzo 2022)¹. Esa investigación incluyó un análisis sobre el narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, la corrupción en puertos y aeropuertos, y se reseñaron los datos más destacados de los grupos criminales responsables más importantes.

Las organizaciones criminales en Venezuela bajo la estructura de red se comportan como entramados que se mueven según las circunstancias, se adaptan a los cambios y tienen capacidad para sobreponerse a las adversidades que enfrentan sus líderes y sus

negocios, al tiempo que actúan en coordinación con actores legales, ilegales y grises de la sociedad². Las redes criminales, principalmente las más numerosas, tienen subredes que se organizan en distintas localidades geográficas, diversifican sus actividades ilícitas y relaciones que facilitan sus objetivos.

Los altos niveles de corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, la captura de los sistemas de pesos y contrapesos a la gestión - donde el poder Ejecutivo tiene control y decisión sobre el resto de los poderes públicos-, así como la aplicación y la expresión de la discrecionalidad, crean el entorno institucional venezolano favorable para la actividad criminal. Desde hace años se produce un ciclo perverso en el que algunas instituciones del Estado - infiltradas, manipuladas, y cooptadas- dejan de funcionar imparcial y democráticamente para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar

¹ Transparencia Venezuela. Economías Ilícitas al amparo de la corrupción. Disponible en <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/>. 2022.

² Transparencia Venezuela. Agentes criminales, redes e interacciones oscuras. <https://transparenciave.org/agentes-criminales-redes-e-interacciones-oscuras/>. Agosto 2023



general, y pasan a favorecer intereses particulares, muchas veces estrictamente criminales.

En esta nueva investigación del impacto de las economías ilícitas en 2022 y 2023, se presenta una mirada distinta basada en el relevamiento de datos, información y análisis. Sabiendo que en las redes ilícitas convergen agentes estrictamente criminales que aportan su capacidad para ejercer violencia y demandan recursos económicos, información y protección proporcionada por facilitadores o agentes grises como funcionarios públicos, empresarios, abogados, banqueros, y cambistas, entre otros puentes estructurales, concentramos el análisis en entender y caracterizar:

(i) **Las formas de cooptación entre los agentes legales, ilegales e indeterminados, internos y externos a las instituciones del Estado**, que, en la práctica, constituyen los mecanismos de cooptación y operación de las redes criminales identificadas. Estas formas de interacción incluyen:

- a. **El ejercicio de coerción y violencia;** por ejemplo, intimidación y formas de explotación y esclavitud moderna.
- b. **El intercambio de recursos políticos**, que abarca el apoyo mutuo entre líderes políticos y agentes estrictamente criminales (oscuros), así como la formación y la promoción de partidos y movimientos políticos por parte de esos agentes criminales, por ejemplo.
- c. **El flujo de capital social con empresarios**, abogados, y otros facilitadores que proporcionan legitimidad, información, e incluso seguridad para la operación criminal.

(ii) **Los tipos de agentes intervinientes para identificar los roles más relevantes y determinantes en la estructuración y operación de la red criminal**, principalmente en la comisión de violaciones de derechos humanos.

(iii) El nivel de **cooptación y reconfiguración de instituciones**, lo cual se refleja en los efectos y distorsiones de corto, mediano y largo plazo en las esferas económicas, de aplicación de justicia, políticas, sociales y culturales. Se espera analizar estas distorsiones a escala local, nacional y transnacional.

Para lograr esta caracterización, se investigaron empíricamente los siguientes elementos:

1. **Caracterizar el entorno institucional favorable para el delito.**

Durante la última década múltiples redes criminales han surgido y se han fortalecido en Venezuela, expandiéndose a otros países de la región; una situación que se seguirá propagando a medida que se profundiza el desorden institucional del Estado venezolano.

Las características principales del caos institucional que signan la vida social en Venezuela son la impunidad y la corrupción generalizada, en términos de gran corrupción, macrocorrupción y cooptación institucional.

En este informe se analiza los principales cambios institucionales que durante las últimas dos décadas crearon ventanas de oportunidad institucional e incluso promovieron la actividad criminal generalizada, haciendo de Venezuela un punto de inestabilidad hemisférica.

Identificamos los hitos legales, institucionales y políticos que han favorecido el crecimiento de las redes criminales y las economías ilícitas como, por ejemplo: modificación del Código Orgánico Procesal Penal y la creación de las zonas de paz, entre otros. Estos hitos se presentarán en una línea de tiempo.



2. Caracterizar las distorsiones que reflejan la intensidad de la actividad criminal.

Por lo general, la intensidad de la actividad criminal se mide cuantitativamente con estadísticas de delitos. Sin embargo, cuando una red criminal alcanza un nivel avanzado de cooptación institucional y consolida su poder social, político e incluso cultural, el ejercicio de la violencia se vuelve un recurso redundante y hasta contraproducente, que afecta la capacidad de la red criminal para operar exitosamente al interior de las instituciones.

Así, en situaciones de Pax mafiosa -como las observadas en regiones de México durante las décadas de hegemonía política del PRI y de hegemonía criminal del Cartel de Sinaloa (Astorga, 2010)-, el mercado de capacidades institucionales tiende al equilibrio y los agentes intervinientes tienen más incentivos para preservarlo mediante acuerdos políticos y económicos de largo plazo, que mediante los efectos inmediatos y temporales del ejercicio de la violencia o los sobornos esporádicos. Por lo tanto, en estas situaciones las estadísticas de actos delictivos no necesariamente reflejan la verdadera intensidad de la actividad criminal ni su nivel de cooptación, injerencia y control de las instituciones, de manera que las metodologías y los indicadores cuantitativos deben complementarse con análisis cualitativos, que informen acerca del nivel de cooptación y distorsiones que los intereses y las actividades criminales han causado en la vida económica, social, política y cultural de la población.

A partir de un instrumento cualitativo, se realizaron entrevistas y visitas de campo, donde se indagó el nivel de intensidad de las distorsiones en cinco dimensiones cuyas preguntas permiten una aproximación para entender el nivel de penetración y consolidación del poder criminal en un municipio, un estado, o una región. La investigación se dirigió a estudiar las distorsiones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, es decir cómo las economías, flujos y redes ilícitas han afectado de forma negativa cada uno de esas cinco dimensiones de la realidad nacional.

Siguiendo a North (1991), definiendo las instituciones como “las reglas de juego en la sociedad”, incluiríamos las distorsiones institucionales como reflejadas (y analizadas) a partir de las distorsiones en la correcta aplicación (administrativa/política) de esas reglas de procuración de justicia y de funcionamiento administrativo.

Además, se elaboró una base de datos con registros periodísticos e informes desde abril 2022 hasta mayo 2023 sobre la actividad delictiva en las entidades federales objeto de este estudio.



1 VENTAJAS PARA LOS ILÍCITOS PRODUCTO DE CAMBIOS INSTITUCIONALES

La consolidación de estructuras criminales en Venezuela requirió la adaptación de la institucionalidad a intereses particulares a partir del 2000, siempre en procura de acceder a ingentes recursos, ejercer el control social y mantener el poder de algunos grupos.

La centralización y control del poder en el Ejecutivo generó privilegios para sectores concretos del mismo Estado, que articularon una “reestructuración” institucional que garantizó las oportunidades de acceso a recursos y a la toma de decisiones públicas contrarias al interés nacional con impunidad. La tarea fundamental del sistema de contrapesos entre poderes públicos, para impedir el abuso de poder, se fue reduciendo con decisiones políticas, reformas legales, decretos presidenciales nuevos procedimientos y la independencia judicial, hasta quedar prácticamente anulada.

Esto sirvió de escenario favorable al desarrollo de economías ilícitas y al fortalecimiento de alianzas en la red del crimen organizado, en una relación simbiótica con algunos responsables de entes del Estado.

A diario, millones de venezolanos ven quebrantadas sus garantías ciudadanas como nunca antes, con un impacto perverso en su vida cotidiana al ser sometidos a un contexto de violencia, impuesto por estructuras criminales, en especial en estados fronterizos, al que se suman los efectos de la emergencia humanitaria compleja que padece la población.

A continuación, presentamos algunas de las decisiones, acciones u omisiones institucionales, así como un acercamiento a las consecuencias que ocasionaron.



PODER JUDICIAL

1.1 Decisiones contra la independencia, autonomía y capacidad del sistema de justicia:

11/10/1999

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 dictó decreto de reorganización del Poder Judicial y el sistema penitenciario, y acordó constituir una comisión de “Emergencia Judicial” que tenía como función evaluar a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura e informar periódicamente a la ANC. Este hecho originó la renuncia de Cecilia Sosa, quien fuera presidenta de la Corte Suprema de Justicia para ese entonces, por considerar que la injerencia de la Asamblea Constituyente en el poder judicial violaba el Estado de Derecho³. Este decreto de la ANC, sirvió de fundamento para destituir y suspender jueces, con precaria o ninguna garantía al derecho a la defensa; se designaron suplentes e interinos sin sistema alguno de selección. Casi dos años después, en agosto de 2021, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia admitían que más del 90% de los jueces eran provisorios.⁴

9/01/2001

Fue designado Isaías Rodríguez como fiscal general de la República, quien anteriormente ejercía el cargo de vicepresidente⁵. Rodríguez se mantuvo en el cargo de fiscal general hasta el 2008, cuando fue sustituido por Luisa Ortega Díaz,

también cercana a Isaías Rodríguez y a Hugo Chávez. Desde el 2001 han sido designadas personas cercanas al Ejecutivo, en el ente competente para el ejercicio de la acción penal.⁶

14/08/2002

Una sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) absolvió a los militares que se alzaron contra el gobierno de Hugo Chávez, en abril de 2002. La Sala Plena interpretó los sucesos, que incluyeron la salida del poder por unas horas de Hugo Chávez, como un “vacío de poder” y no como un golpe de Estado. Luego de la publicación de la sentencia, Chávez llamó públicamente “inmorales” a los magistrados del TSJ. “Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. ¡Qué sabroso!” (...) **“Ahora nosotros no nos vamos a quedar con esa. Si creen que nos vamos a quedar con esa, están muy equivocados. Ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas”,** dijo.⁷

20/5/2004

La Asamblea Nacional, con una mayoría del partido de gobierno, dictó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que modificó la composición de las salas de ese juzgado. La reforma elevó de 20 a 32 el número total de magistrados y los jueces incorporados eran afines al gobierno y al partido de gobierno, entre ellos: Luis Velásquez Alvaray (diputado chavista) y Luis Franceschi (diputado chavista), Eladio Aponte Aponte (exfiscal y general del Ejército) y Francisco Carrasquero (expresidente del Consejo Nacional Electoral). **“¡Son ustedes la cabeza**

³ La presidenta de la Corte Suprema de Justicia dimite y disuelve este organismo. Disponible en: <https://www.elmundo.es/elmundo/1999/agosto/24/internacional/venezuela.html>

⁴ La demolición de la autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela 1999-2001. Disponible en: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2021/11/Brewer-Carias-Demolicion-del-Poder-Judicial-1999-2021-portada.pdf>

⁵ El vicepresidente en Venezuela es un cargo que nombra y destituye el Presidente de la República. No existe el binomio electoral como en otros países.

⁶ Transparencia Venezuela. Justicia y Chavismo. Disponible en Suprema Injusticia. Justicia y chavismo

⁷ Transparencia Venezuela. Justicia y chavismo. Disponible en: Suprema Injusticia. <https://supremainjusticia.org/justicia-y-chavismo/>



de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!", celebró Nicolás Maduro, entonces jefe de la fracción parlamentaria oficialista en la Asamblea Nacional.⁸

2004-2009

La CIDH en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela (2009), señaló que: "según la información recibida por la Comisión, el 100% de los 2.644 fiscales designados entre 2004 y septiembre de 2009 no habrían sido nombrados mediante un concurso público y, por tanto, no ostentan la titularidad de sus cargos [205]. Sólo en el año 2008 se nombraron 411 fiscales auxiliares interinos, 183 fiscales provisorios (...) Como lo ha manifestado anteriormente la Comisión"⁹. La falta de designación por concurso para un alto porcentaje de jueces y fiscales, se mantiene para el 2023.

2006

Fue presentado el plan estratégico de Humanización de las cárceles, planteado por el entonces ministro de Relaciones Interiores y teniente coronel Jesse Chacón, que incluía abrir 15 cárceles en un lapso previsto hasta 2012. Tareck El Aissami, que estuvo en el cargo entre 2008 y 2011, presentó otro plan de Humanización Penitenciaria, que contemplaba la construcción de 25 nuevas cárceles, de las cuales, para 2018, se terminaron solo 2: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro.¹⁰

10/12/2009

La juez María Lourdes Afiuni fue detenida por otorgar en libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero que había estado en prisión desde febrero de 2007, señalado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales. Fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado.¹¹

Al día siguiente, Hugo Chávez pidió en una transmisión conjunta en radio y televisión denominada "cadena"¹² que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel, por haber "facilitado la fuga" de Cedeño, ya que el banquero huyó del país al ser liberado. Afiuni pasó más de un año en la cárcel, en condiciones deplorables y junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había condenado) que la amenazaron de muerte. Ante las críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto domiciliario. El 21/3/2019, el juez Manuel Antonio Bognanno, condenó a la juez a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero, una figura no prevista en la legislación venezolana.¹³

26/7/2011

Se anunció la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario. La medida quebrantó el principio constitucional

8 Transparencia Venezuela. Justicia y chavismo. Disponible en: Suprema Injusticia. <https://supremainjusticia.org/justicia-y-chavismo/>

9 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. III. La separación e independencia de los poderes públicos. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/venezuela2009sp/ve09capiiisp.htm>.

10 Una Ventana a la Libertad presentó el informe ¿Sistema penitenciario o infierno? Civilis Derechos Humanos. <https://www.civilisac.org/informes/una-ventana-a-la-libertad-presento-el-informe-sistema-penitenciario-o-infierno>

11 Cronología del caso de María Lourdes Afiuni. Acceso a la Justicia. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/>

12 Las "cadenas" son transmisiones de radio y televisión en las que todos los medios de comunicación de radio y televisión son obligados a interrumpir su programación habitual para difundir en simultáneo, a través de la señal del canal del Estado Venezolana de Televisión, el discurso del presidente. Con Hugo Chávez se hizo muy frecuente este mecanismo de información, que otros presidentes de Venezuela solo activaban ante emergencias nacionales. Chávez podía pasar hasta más de cinco horas hablando al país y lo hacía varias veces a la semana.

13 Runrunes. Juez María Lourdes Afiuni condenada por corrupción espiritual. <https://runrun.es/noticias/376662/jueza-maria-lourdes-afiuni-condenada-por-corrupcion-espiritual/> 21/03/2019.



de descentralización de las cárceles, establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).¹⁴

16/10/2012

Hugo Chávez decretó la emergencia de infraestructura carcelaria, con el propósito de impulsar el proyecto de construcción de los centros de reclusión para el sistema penitenciario venezolano. La entonces ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, anunció que se construirían 24 centros penitenciarios para procesados, uno en cada estado de Venezuela. En 2016 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, investigó a la ministra María Iris Varela, por presunto desvío de fondos públicos por 6.5 millones de dólares (USD 6.500.000)¹⁵. Ver denuncia presentada por Observatorio de Prisiones, y Transparencia Venezuela sobre el centro de procesados del Estado Zulia que nunca se construyó.¹⁶

23/12/2015

Con Nicolás Maduro en la presidencia fueron designados en forma irregular 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, justo antes de que la oposición tomara posesión de la mayoría en el Parlamento¹⁷. Algunos de los magistrados designados

“habían ocupado cargos en el Poder Ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder” y “la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución”, según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el 15 de julio de 2020.¹⁸

2015

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, prometió que el organismo resguardaría al Gobierno frente a cualquier acción de la Asamblea, ahora opositora¹⁹. El 10/5/2016, mediante una sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia suprimió las funciones del Parlamento de mayoría opositora²⁰. En su informe de julio de 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que, entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, ese juzgado dictó 127 sentencias que “invalidaban decisiones” del Parlamento. Estas decisiones atacaron especialmente las funciones de control político de la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública. Señaló también que, desde marzo de 2017, “el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.²¹

- 14 Decreto 2.866. Gaceta Oficial 39.721 <https://tugacetaoficial.com/leyes/decreto-8-266-mediante-el-cual-se-crea-el-ministerio-del-poder-popular-para-el-servicio-penitenciario-gaceta-39721-2011-texto/> 26/07/2011.
- Runrunes. El pranato controla el 89% de la población carcelaria en Venezuela, según el OVP. <https://runrun.es/noticias/480523/el-pranato-controla-89-de-la-poblacion-carcelaria-en-venezuela-segun-el-ovp/> 10/08/2022.
- Observatorio Venezolano de Prisiones Un recluso muerto diario en 8 años de gestión de Iris Valera <https://oveprisiones.com/un-recluso-muerto-diario-en-8-anos-de-gestion-de-iris-valera/> 25/07/2019
- 15 Runrunes. Iris Valera recibió \$348 millones y solo construyó 2 de las 24 cárceles prometidas. <https://runrun.es/investigacion/265441/las-cuentas-pendientes-de-iris-varela-con-el-sistema-penitenciario/> 23/06/2016
- 16 Transparencia Venezuela. Los papeles de la prisión. Abandono penitenciario en Zulia. <https://transparenciave.org/project/los-papeles-de-una-prision-inconclusa-destapan-un-escandalo-de-corrupcion-y-violacion-de-ddhh/>
- 17 Suprema Injusticia. Transparencia Venezuela. Justicia y chavismo. <https://supremainjusticia.org/justicia-y-chavismo/>
- 18 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Disponible en: <https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Bachelet-julio-2020.pdf>
- 19 Transparencia Venezuela. Memorial de agravios. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2016/12/Memorial-de-Agravios-2016.pdf>. 2016.
- 20 Suprema Injusticia. Transparencia Venezuela. El TSJ aparenta haber anulado su golpe a la Asamblea Nacional. <https://supremainjusticia.org/el-tsj-aparenta-haber-anulado-su-golpe-a-la-asamblea-nacional/>
- 21 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Disponible en: <https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Bachelet-julio-2020.pdf>



2017

El Ministerio Público venezolano dejó de publicar informe de gestión y rendición de cuentas.

Julio 2017

El Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión que permite a los jueces ordenar al Ministerio Público que continúe las investigaciones, “incluso si los fiscales no consideran que hay suficiente fundamento para hacerlo, lo que podría interferir con la independencia fiscal”, denunció la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dependiente de la ONU.²²

5/08/2017

Luisa Ortega Díaz fue destituida del cargo luego de hacer críticas a las acciones ejecutadas por el Gobierno nacional, y anunciar el inicio de investigaciones por casos de gran corrupción²³. Luego de su destitución se fue al exilio y en su lugar fue designado Tarek William Saab, quien fue militante del partido de gobierno, PSUV, y gobernador del estado Anzoátegui, en representación del partido chavista.²⁴

19/01/2022

La Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, dictó reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. La composición del juzgado pasó de 32 a 20 magistrados. Hay tres vicios a destacar en el procedimiento de reestructuración:

- i) se mantuvo el control político-partidista del comité de postulaciones judiciales,

- ii) se registró la reelección inconstitucional de magistrados alineados con el gobierno (60% de los magistrados designados tenían cumplido el lapso legal de permanencia en el cargo²⁵)
- iii) la elección de magistrados se realizó fuera de lapsos y a espaldas del país.²⁶

1.2 Situación del sistema de justicia y consecuencias de su afectación:

La designación de personas afines al Gobierno nacional en la cabeza de las máximas instituciones del sistema de justicia, la inestabilidad en el cargo de los funcionarios, la asignación de salarios insuficientes y las sistemáticas decisiones para intervenir la estructura del sistema, han originado que la justicia venezolana no funcione con independencia e imparcialidad y que sus operadores sean especialmente vulnerables a las prácticas corruptas y al crimen organizado. Con esto se garantiza la impunidad en los casos que más afectan a la sociedad, tanto por su magnitud como por su impacto.

Una investigación periodística denunció que 1.101 de los 2.151 jueces activos en febrero de 2019 estaban inscritos en las listas del PSUV (partido de gobierno) y señaló que 450 jueces activos, así como retirados, lograron registrar empresas y firmar contratos públicos. Para esa fecha, 106 jueces activos inscritos en el PSUV tenían empresas que hacían negocios con diferentes instancias de gobierno.²⁷

22 ONU. CDH. “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. 15 de septiembre de 2020, párr. 163. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf

23 BBC. La Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general Luisa Ortega. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40838619> 5/08/2017.

24 En 2021 Tarek William Saab fue señalado por Luisa Ortega Díaz de enriquecerse cuando era gobernador del estado Anzoátegui. Un exalcalde de la ciudad de Guanta, en Anzoátegui, Jhonnathan Marín, sentenciado en Estados Unidos por corrupción, señaló - en septiembre de 2022- que Saab pertenecía a una supuesta red de sobornos en torno a la petrolera Pdvs.

25 Suprema Injusticia. Transparencia Venezuela. 11 magistrados repiten en el TSJ, 8 se estrenan y una vuelve. <https://supremainjusticia.org/11-magistrados-repiten-en-el-ts-8-se-estrenan-y-una-vuelve/> 28/04/2022.

26 Transparencia Venezuela. Suprema Injusticia. se mantuvo el control político-partidista del comité de postulaciones judiciales. <https://supremainjusticia.org/3-vicios-hacen-que-nuevo-ts-no-sea-mejor-que-anterior/2/05/2022>.

28 ArmandoInfo. Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias. Disponible en: <https://armando.info/los-jueces-de-venezuela-asfaltan-calles-y-firman-sentencias/> 17/02/2019.



Los tribunales de la República, desde el 2003, no dictan una decisión desfavorable a las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que muchas han sido ampliamente cuestionadas y de la evidente crisis de Venezuela. También han emitido más de 100 sentencias que violan el derecho de acceso a la información pública, que han limitado el ejercicio de derechos como el control social de las políticas públicas y otros como la libertad de expresión.²⁸

Operadores del sistema de justicia forman parte de las estructuras criminales, y quienes, por diferentes motivos, han efectuado denuncias y señalamientos contra el sistema de justicia o contra personas que ejercen el poder han sido objeto de acusaciones e investigaciones. Algunos han tenido que salir de Venezuela, mientras que otros han sido encarcelados.

En mayo de 2006 el entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, después de ser suspendido por el Consejo Moral Republicano- pese a su cercanía con el chavismo- por un caso de corrupción, denunció una red de 400 jueces que servía a los intereses del narcotráfico, y acusó al para entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, de pretender controlar el Poder Judicial venezolano.²⁹

En marzo de 2012, Eladio Aponte, militar, cercano al chavismo, y entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue destituido por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, por su supuesta relación con mafias de la droga. Según reportes de prensa de Estados Unidos, país donde se refugió Aponte Aponte, el

exmagistrado señaló a varios altos funcionarios de ese entonces por su presunta vinculación con el tráfico de drogas: “el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (entonces presidente de la Asamblea Nacional)”³⁰. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el magistrado admitió que “la justicia es una plastilina” y tachó de “falacia” la autonomía del sistema de justicia en Venezuela.

El sistema penitenciario también adolece de corrupción, escasa seguridad, infraestructuras deficientes, hacinamiento, personal insuficiente y guardias mal formados, lo que ha permitido el surgimiento de bandas armadas.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, explicó para el informe Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela que los planes de “humanización” para las cárceles, impulsados por Tareck El Aissami, cuando era ministro de Relaciones Interiores y luego gobernador de Aragua (2012-2017), “solo sirvieron para entregarle el control de las cárceles a los presos, con la excusa de evitar la violencia”.³¹

La organización Una Ventana a la Libertad, en un informe publicado en 2018, afirmó que en Venezuela hay cárceles que son consideradas “territorios independientes” de la acción del Estado (entre ellas Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, y Vista Hermosa), en los que algunos privados de libertad denominados “pranes”³² imponen el orden interno y coordinan delitos desde el interior de las cárceles.

28 Transparencia Venezuela. Más de 100 sentencias acumula el TSJ contra los derechos de los venezolanos. <https://transparenciave.org/mas-de-100-sentencias-acumula-el-tsj-contralos-derechos-de-los-venezolanos/>

29 Suprema Injusticia. Transparencia Venezuela. Justicia y chavismo. <https://supremainjusticia.org/justicia-y-chavismo/>

30 Voz de América. Aponte: en Venezuela se manipula la justicia. https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_trafico_droga_aponte_rangel/178727.html18/04/2012.

31 Transparencia Venezuela. Economías Ilícitas. Grupos criminales tras actividades ilícitas. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/>

32 El término “pran”, usado para denominar al líder de la organización carcelaria que controla determinada cárcel, no tiene un origen claro. Algunas tesis señalan que corresponde a la combinación de siglas de la frase, “preso rematado asesino nato”, pero esta afirmación pareciera no tener mucho asidero. Disponible en. Transparencia Venezuela. Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado. Capítulo I: Taxonomía del crimen. Los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/07/I-Taxonomia-del-crimen-Los-9-bloques-delictivos-que-controlan-Venezuela.pdf>



Se consolidó el pranato³³ en la mayoría de las cárceles de Venezuela y miles de presos han fallecido por la violencia, las enfermedades u otras causas en los recintos penitenciarios. Hay denuncias contra la exministra de Asuntos Penitenciarios María Iris Varela, quien estuvo al frente de las cárceles desde 2011 a 2017 y luego de 2018 a 2020, que la vinculan con los llamados “pranes”, al punto que se indica que montó su “ejército personal de presos” para defender la llamada Revolución. “Varela fue señalada por el general (Ej) Manuel Ricardo Christopher Figuera, después de la llamada Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado y que el destino de estos, según le habría dicho a Padrino, que ‘tenía entrenados a varios prisioneros, de la cual ella era su comandante’”.³⁴

a programas sociales como el Plan Bolívar 2000, que estaba enfocado en alimentos para los más vulnerables.

La toma de espacios cívicos por parte de los militares avanzó al punto que han ocupado importantes cargos en el Poder Ejecutivo central, en sectores estratégicos del Estado y de elección popular³⁵. Los militares lograron articular una red empresarial pública, que va desde un banco de la Fuerza Armada, pasando por una televisora y varias decenas de empresas dedicadas a toda clase de actividades³⁶. Hasta noviembre de 2022, Transparencia Venezuela registró 964 Empresas Propiedad del Estado (EPE), de las cuales 115 (113 nacionales y 2 regionales) cuentan con militares en sus juntas directivas³⁷. En 2021, de los 34 ministerios que existían en Venezuela –incluyendo el Ministerio del Estado para la Nueva Frontera de Paz–, 11 estaban bajo el mando de un militar³⁸. El manejo de estas empresas ha sido opaco y sin rendición de cuentas.



ROL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

2.1 Políticas vinculadas al rol de la Fuerza Armada Nacional y su especial responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico:

1999

La “unión-cívico militar” fue impulsada por el Poder Ejecutivo desde febrero de 1999 cuando los militares fueron incorporados

25/04/2005

El gobierno de Hugo Chávez rompió los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, que habían permitido el avance de la lucha contra los traficantes de drogas en Venezuela.³⁹

16/12/2005

La Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno, sancionó la ley contra el tráfico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

³³ Organización criminal constituida por pranes.

³⁴ Infobae. La vicepresidente de la Asamblea chavista, Iris Varela, montó un ejército personal de presos. <https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/06/13/la-vicepresidenta-de-la-asamblea-chavista-iris-varela-monto-un-ejercito-personal-de-presos/>. 13/06/2021

³⁵ En 2004 se creó el Ministerio de Alimentación dirigido desde sus inicios por militares, pues 11 de los 12 ministros fueron militares. En 2016 el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López (ratificado en ese cargo en julio de 2023 por Nicolás Maduro) comenzó a dirigir 15 organismos con competencia en materia de alimentación. Los militares también fueron designados en áreas medulares como el sector eléctrico y en la empresa estatal Corpoelec estuvieron uniformados sin experiencia en el área. Entre estos militares están: el general de División Hipólito Izquierdo, el teniente Jesse Chacón y el mayor general Luis Motta Domínguez, éste último investigado en una causa en Estados Unidos.

³⁶ Transparencia Venezuela. Poder militar, crimen y corrupción. <https://transparenciave.org/project/poder-militar-crimen-y-corrupcion>

³⁷ Vendata. Transparencia Venezuela. Empresas Propiedad del Estado venezolano -EPE- Ascenden a 905 las empresas propiedad del estado identificadas <https://vendata.org/site/empresas2/>

³⁸ “Participación militar en el gabinete ministerial”. Control Ciudadano, 2021. Disponible en: <https://www.controlciudadano.org/contexto/infografias/participacion-militar-en-el-gabinete-ministerial/>

³⁹ El País de España. El Gobierno de Venezuela rompe 35 años de alianza militar con Estados Unidos https://elpais.com/diario/2005/04/26/internacional/1114466420_850215.html 25/04/2005.

Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Un problema de Estado. Transparencia Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/12/03-Crimen-organizado-y-corrupcion-en-Venezuela.pdf>



En dicha ley se dio a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la competencia de investigación en materia de droga, anteriormente solo la tenía la Guardia Nacional Bolivariana (GNB):

De los órganos competentes de investigaciones penales

Artículo 121. "Son competentes como autoridades de policía de investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público: 1.

La Fuerza Armada Nacional, en sus componentes de Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional".⁴⁰

Esta competencia fue ratificada por la Ley de Drogas de 2010, artículo 194.⁴¹

07/07/2014

Fue designado como Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López por Nicolás Maduro. Desde entonces ha estado al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue ratificado nuevamente en julio de 2023 en ese cargo. Es señalado por las autoridades de Estados Unidos de, presuntamente, colaborar con el narcotráfico.⁴²

2.2 Consecuencias de estas políticas relacionadas con el rol de los militares.

El primer caso importante de corrupción, en el gobierno del presidente Hugo Chávez, fue en el sector militar. Investigaciones periodísticas señalaron al general Víctor Cruz Weffer, quien encabezaba el Plan Bolívar 2000. Otros casos

de militares de alto rango fueron señalados en otros países. Además del caso ya mencionado del general Aponte, están los casos del mayor general Luis Motta Domínguez, quien es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero producto de la corrupción. El general en jefe de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol, es investigado por narcotráfico en Estados Unidos. El mayor general Clíver Alcalá Cordones ha estado preso por orden de un tribunal de Nueva York durante más de dos años, por un caso de drogas en el que son mencionados altos cargos de Venezuela, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y el exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez, el general y exdiputado Hugo "El Pollo" Carvajal, quien fue extraditado en 2023 a ese país, entre otros.

La ruptura de los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, la falta de apoyo internacional en la lucha contra las drogas y la ausencia de investigación contra altos funcionarios acusados de estar, presuntamente, involucrados en actividades del crimen organizado, ha permitido que creciera el negocio del narcotráfico en Venezuela.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU advirtió en 2020 sobre la penetración del narcotráfico en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la formación del denominado Cartel de Los Soles.⁴³ Mildred Camero, exdirectora de la anterior Oficina Nacional Antidrogas, durante el gobierno de Hugo Chávez, agregó que aunque algunos miembros de la antigua Policía Técnica

40 Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. https://www.imolin.org/doc/amlid/Venezuela/Venezuela-LEY_ORGANICA_CONTRA_EL_TRAFICO_ILICITO.pdf

41 Gaceta Oficial 39.546. <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20220119131358.pdf> 05/11/2010.

42 El Nuevo Herald. Entró tarde, pero este general venezolano es clave para el Cártel de los Soles, según EEUU Disponible en: <https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article241624746.html#storylink=cpy>

43 Infobae. La ONU presentó el primer informe que analiza la infiltración del narcotráfico y el Cártel de los Soles en la Fuerza Armada de Venezuela <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/> 27/02/2020.

ONU. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_ebook_AR2019.pdf. Informe 2019.



Judicial (hoy CICPC) y de la Guardia Nacional facilitaban el tráfico de drogas, no estaban tan integrados con el crimen como las actuales redes de militares corruptos venezolanos".⁴⁴

Finalmente, hay que destacar que las tácticas militares en respuesta a la delincuencia organizada dan lugar a violaciones de derechos humanos.



INCREMENTO DE PODER, OPACIDAD Y DISMINUCIÓN DE CONTROLES

3.1 Políticas que favorecieron el control del poder del Ejecutivo, la opacidad y la disminución de contrapesos:

15/12/1999

Con la aprobación de la Constitución de 1999 se suprimieron algunos límites para dictar leyes habilitantes (art. 203). Anteriormente el Presidente de la República solo podía emitir decretos con rango y valor de ley en materia económica y financiera. Ahora estos decretos pueden dictarse en cualquier materia⁴⁵, incluyendo términos tan genéricos como la seguridad ciudadana y de la nación, que por si solos no representan un riesgo de autoritarismo, pero que en la práctica su abuso sin límites ha usurpado funciones del Poder Legislativo venezolano.

Además de esa competencia, el Parlamento ha entregado al Presidente de la República su función legislativa durante grandes períodos.

1999-2014

La Ley de Contrataciones Públicas fue reformada en seis oportunidades. En las reformas se incrementaron las causales para excluir las licitaciones y otros mecanismos de selección de proveedores y asignación de contratos con mínimos de transparencia, y se incrementaron las causales de contratación directa y la opacidad, permitiendo la inclusión de cláusulas de confidencialidad a todo el contrato en sí. Solo por acuerdos firmados por el presidente con terceros países, los contratos realizados con empresas de esas naciones tenían puerta franca y derecho al secreto, sin fecha de caducidad.

2000

Surgieron los llamados "Círculos Bolivarianos" que también se hacían llamar "colectivos", algunos de los cuales existían desde los años 60, procedentes de la lucha armada. Estos grupos surgieron principalmente en la Parroquia 23 de Enero, en Caracas, pero han tenido presencia en casi todos los estados de Venezuela. En 2020 se estimaba que los colectivos contaban con alrededor de 8.000 hombres desplegados en los distintos estados y municipios de Venezuela. Son grupos de civiles armados, principalmente de corte urbano, y se autodenominan como "guardianes de la revolución"⁴⁶ que se convirtieron en grupos

44 Insight Crimen. Informe reciente describe la evolución y militarización del narcotráfico en Venezuela <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/informe-reciente-describe-evolucion-y-militarizacion-narcotrafico-venezuela/#:~:text=La%20droga%20era%20ingresada%20ilegalmente,precursores%20qu%C3%ADmicos%20por%20la%20frontera> 23/ 03/2017

45 Brewer Carias, Allan. <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/09/892-839-EL-REGIMEN-CONSTITUCIONAL-DE-LOS-DECRETOS-LEYES-Y-DE-LOS-ACTOS-DE-GOBIERNO-San-Crist%C3%B3bal.pdf>

José Antonio Muci Borjas: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/140/rdpub_2014_140_51-78.pdf

Eloisa Avellaneda Sixto: <https://www.derechoadministrativoucv.com.ve/wp-content/uploads/2020/05/homenaje-01-05.pdf>

46 Transparencia Venezuela. Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado. Capítulo I: Taxonomía del crimen. Los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/07/I-Taxonomia-del-crimen-Los-9-bloques-delictivos-que-controlan-Venezuela.pdf>.



criminales tan poderosos que le costó su puesto⁴⁷ y su libertad a un hombre clave, en su momento, en la estructura de seguridad del Estado, el militar con grado de mayor general del Ejército, Miguel Rodríguez Torres⁴⁸, excarcelado en 2023 tras negociar con el gobierno de Nicolás Maduro.⁴⁹

2003

Inició el control de cambio de divisas, que otorgó el monopolio del manejo de las divisas al Poder Ejecutivo, lo que con el tiempo se convirtió en uno de los principales mecanismos de corrupción a través de la asignación irregular de divisas⁵⁰. Según la consultora Ecoanalítica, entre 2005 y 2018, las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalen a 73.666 millones de dólares para el sector público no petrolero, y 149.314 millones de dólares para el sector privado. Este control sigue vigente en 2023, aunque ha tenido flexibilizaciones desde el año 2018 con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, que establecía cárcel para quienes se movían fuera del control de cambio impuesto por el Gobierno venezolano.⁵¹

2003

Junto al control de cambios inicia el control de precios de productos esenciales, que en el transcurso del tiempo se fue ampliando a una larga lista de bienes y servicios que fueron desapareciendo de los anaqueles.

Este mecanismo sigue vigente, pero ante la severa escasez y crisis alimentaria del 2015 al 2018, el gobierno dejó de aplicarlo, aunque de vez en cuando algún político amenaza al sector privado.

2004-2005

Se crearon los fondos parafiscales que manejaron ingentes recursos provenientes de la petrolera, que no estaban sometidos a discusión parlamentaria y que son gestionados con altos niveles de opacidad y discrecionalidad en su ejecución. En 2005 se crea el más importante de esos fondos, el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), para ser utilizado como un receptor de ingresos públicos provenientes principalmente de la explotación petrolera y ejecutor de gastos públicos, sobre todo gastos de inversión.⁵²

2009-2012

En medio del boom de construcción en estos años, a través del endeudamiento principalmente con China, se comenzó a configurar un “negocio” en torno a las obras públicas por parte de bandas delictivas que se hacían llamar “sindicatos”.⁵³

Eran grupos armados para extorsionar a toda obra en proceso y exigir a los contratistas incluir una nómina paralela que recibía paga sin asistir a trabajar. Los más poderosos extorsionaban, bajo la bandera de la Revolución chavista, en la obra del tren que atravesaba

47 Runrunes. Rodríguez Torres perdió la pelea contra los colectivos. <https://runrun.es/nacional/venezuela-2/164257/rodriguez-torres-acaba-de-perder-la-pelea-contra-los-colectivos/> 25/10/2014

48 Poderopedia. Miguel Rodríguez Torres. <https://poderopediave.org/persona/miguel-rodriguez-torres/>

49 Transparencia Venezuela. Suprema Injusticia. “Confesar o morir preso como Baduel”, lo que sabe de la negociación que permitió la liberación del exministro Rodríguez Torres. <https://supremainjusticia.org/confesar-o-morirse-pres-o-como-baduel-lo-que-sabe-de-la-negociacion-que-permitio-la-liberacion-del-exministro-rodriguez-torres/>

50 Transparencia Venezuela. Patrón de Gran Corrupción. Actualización. <https://transparenciave.org/project/actualizacion-patron-de-gran-corrupcion-un-esquema-para-el-desfalco-y-la-violacion-de-ddhh/>

51 Deutsche Welle, “La ANC de Venezuela deroga el régimen de ilícitos cambiarios”, agosto 2018 <https://www.dw.com/es/la-anc-de-venezuela-deroga-el-r%C3%A9gimen-de-il%C3%ADcitos-cambiarios/a-44936269>

52 Transparencia Venezuela. Patrón de Gran Corrupción. Actualización. <https://transparenciave.org/project/actualizacion-patron-de-gran-corrupcion-un-esquema-para-el-desfalco-y-la-violacion-de-ddhh/>

53 Las disputas entre estos seudosindicatos de la construcción generan varios asesinatos año tras año, muchos de ellos bajo la modalidad de sicarios. En otras oportunidades, los homicidios se ejecutan en cumplimiento de la amenaza extorsiva contra trabajadores o dueños de las obras. Disponible en: Transparencia Venezuela. Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado. Capítulo I: Taxonomía del crimen. Los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/07/I-Taxonomia-del-crimen-Los-9-bloques-delictivos-que-controlan-Venezuela.pdf>.



el Estado Aragua, en las del del tren de Los Llanos, y en las obras y empresas de Guayana. Estos grupos con sus líderes en prisión, se convirtieron, sin oposición por parte del Gobierno, en redes criminales de acción en toda Latinoamérica.⁵⁴

2015

Desde ese año, no se publica la Ley de Presupuesto nacional, ni la Ley de Endeudamiento. Ningún ente de la administración nacional (presidencia de la República, ministerios, institutos autónomos, Contraloría General, Fiscalía General o Tribunales de la República), ha publicado la ejecución del presupuesto asignado, ni su informe de gestión o de planificación. Tampoco han publicado los procedimientos para la selección de contratistas, las empresas beneficiadas, los contratos ni los pagos efectuados. En agosto de 2017, los ciudadanos dejaron de tener acceso a la información sobre las empresas que contratan con el Estado, asentadas en el Registro Nacional de Contratistas.

2016

El Ejecutivo Nacional gobernó en emergencia, dictó más de 30 decretos de Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, 13 decretos de Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (Covid-19) y otros decretos de Emergencia Energética de la Industria de Hidrocarburos. Los decretos de emergencia incrementaron la discrecionalidad del Ejecutivo, suprimieron controles y le permitieron al gobierno tomar decisiones en materia presupuestaria y financiera, y en contratos

de interés nacional, sin la aprobación o autorización del Parlamento, durante más de cinco años.⁵⁵

En el marco de los estados de excepción, se dictaron normas especiales que flexibilizaron los procesos para la contratación de bienes, servicios y obras, por parte de los entes del poder público o que permitieron la contratación sin necesidad de realizar procesos de selección. La modalidad de contratación directa se convirtió en la regla.

24/02/2016

El Gobierno de Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), “para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de la nación y romper con el rentismo petrolero”. El proyecto tenía como objetivos “estimular las actividades sectoriales asociadas a la explotación de los recursos minerales del país, con la participación de empresas privadas, públicas y mixtas, así como la participación de pequeños mineros, con criterios de soberanía y responsabilidad ambiental”.⁵⁶ Se avaló la minería en 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, es decir, 12% del territorio venezolano, en una zona ecológica protegida, con presencia de más de 190 comunidades indígenas.

Ya para 2022, el secretismo del gobierno venezolano se ha consolidado y no hay información oficial sobre las áreas que están operativas en el Arco Minero y la cantidad de oro que llega al Banco Central de Venezuela (BCV), que es el responsable del metal precioso.

54 Transparencia Venezuela. Economías ilícitas. Capítulo III: El Tren de Aragua. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/tren-de-aragua/>

55 Transparencia Venezuela. Patrón de Gran Corrupción. Actualización. <https://transparenciave.org/project/actualizacion-patron-de-gran-corrupcion-un-esquema-para-el-desfalco-y-la-violacion-de-ddhh/>
Deutsche Welle, “La ANC de Venezuela deroga el régimen de ilícitos cambiarios”, agosto 2018 <https://www.dw.com/es/la-anc-de-venezuela-deroga-el-r%C3%A9gimen-de-il%C3%ADcitos-cambiarios/a-44936269>

56 Ministerio de Desarrollo Minero Económico. Arco Minero del Orinoco (AMO): un modelo de minería responsable. <http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/#:~:text=El%2024%20de%20febrero%20de,%C2%B0%2040855.>



La discrecionalidad en la creación de empresas mixtas y alianzas estratégicas con personas cercanas a líderes del gobierno sin experiencia y capacidad conocida en esa industria, es un tema que desarrolla esta investigación en el reporte sobre flujos ilícitos.

2017

La Contraloría General de la República (CGR), está a cargo de Elvis Amoroso⁵⁷, un exdiputado del Partido de gobierno, quien antes de su designación se calificó como “militante activo de la revolución y chavista”. La CGR dejó de publicar sus informes de actuación en 2017 y, desde la designación de Amoroso en 2018, no se tiene información de alguna auditoría efectuada al presupuesto nacional y su ejecución, o a la gestión de las Empresas Propiedad del Estado más importantes, como la petrolera Pdvsa, o de aquellas efectuadas a sectores de interés e importancia nacional, como el eléctrico, el sistema de salud o el sector alimentos. El exdiputado solamente ha anunciado investigaciones contra opositores al Gobierno nacional.

12/10/2020

Aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos, por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley permite a las autoridades de los órganos y entes públicos otorgar el carácter reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier documento, información, hecho o circunstancia con el fin de contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales⁵⁸. También autoriza al Ejecutivo Nacional a inaplicar leyes sin necesidad de un

control previo por parte de otro poder público, y establece expresamente que son de carácter secreto y reservado las medidas implementadas que supongan la inaplicación de una norma.

17/09/2021

Aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público⁵⁹. Esta ley que no asegura el cumplimiento del ejercicio del derecho a acceso a la información pública. En primer lugar, no establece expresamente que debe ser pública toda información que poseen los órganos y entes de la administración. También deja por fuera la transparencia activa, no establece la reserva de la información como la excepción, no menciona el tiempo máximo de la reserva, ni establece sanciones a los funcionarios que nieguen el acceso a la información.

3.2 Consecuencia de las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo venezolano

El incremento sistemático del control por parte del Poder Ejecutivo propició que el secretismo del Gobierno venezolano se ha consolidado para la fecha de publicación de este informe (agosto, 2023). No hay información oficial sobre las contrataciones de interés nacional, el número de empresas propiedad del Estado, el número de empresas mixtas, las alianzas estratégicas, las áreas que están operativas en el Arco Minero y la cantidad de oro que llegan al Banco Central de Venezuela (BCV), que es el responsable del metal precioso.

57 Poderopedia. Elvis (Hidrobo) Amoroso. <https://poderopediave.org/persona/elvis-amoroso/>

58 Artículo No. 39 de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos.

59 Transparencia Venezuela. La Ley de Transparencia aprobada por la Asamblea Nacional consolida el secretismo Disponible en: <https://transparencia.org.ve/la-ley-de-transparencia-aprobada-por-la-asamblea-nacional-consolida-el-secretismo/> 17/09/2021.



El gobierno de Nicolás Maduro se ha amparado en la Ley Antibloqueo para hacer negocios opacos que involucran a las empresas estatales, entre ellas, a Pdvsa. También se empezaron a entregar empresas estatales a inversionistas privados, sin que exista información clara, completa, continua y verificable de estos procesos. Una investigación publicada por Transparencia Venezuela en diciembre de 2021⁶⁰ precisó que al menos desde 2015, el gobierno venezolano ha puesto 33 empresas estatales en manos privadas, pero estas operaciones se aceleraron notablemente desde la aprobación de la Ley Antibloqueo. La mayoría de las empresas identificadas pertenecen al sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero.

El contrabando de oro, diamantes, coltán, rodio, cobalto y combustible; la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, esclavitud moderna, entre otros, son algunas de las prácticas ilícitas en la zona minera, donde opera una estructura delictiva frente a la inacción del gobierno. “Exfuncionarios de inteligencia e investigadores independientes han confirmado que las autoridades conviven con las bandas criminales porque les reportan ganancias mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín”.⁶¹

En el informe Oro Mortal, de Transparencia Venezuela, varias fuentes consultadas estimaban que para 2018 entre 70% y 90% del oro que se extraía, salía del territorio de manera ilegal -por tierra y aire- en operaciones en las que estarían involucrados funcionarios del alto gobierno y personas del entorno presidencial. En 2018 el contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Ecoanalítica. Se ha registrado que en el Arco Minero actúan los llamados sindicatos mineros, liderados por los

llamados “pranes”, ejerciendo el control a sangre y poder de fuego. Más recientemente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también estaría presente en la zona en el occidente del Arco Minero del Orinoco (AMO).

En los últimos años, se acudió a la minería ilícita del oro con fines de lucro y como una forma de lavar dinero proveniente de otros delitos por la falta de regulación y control. La extracción de oro garantiza altos precios del metal en el mercado internacional, es relativamente fácil de movilizar y hay bajo riesgo de detección.

El control de precios fue un incentivo al contrabando de gasolina, que afectó directamente a Pdvsa y a los venezolanos. Las mafias compraban la gasolina en Venezuela en bolívares para revenderla en dólares en Colombia. Parte de la ganancia en dólares se vendía en el mercado paralelo de divisas para obtener los bolívares necesarios para comprar más gasolina y continuar el ciclo. Aún en 2022, Nicolás Maduro se quejaba de estas mafias: “Ahora, ¿es que es imposible lograr que se vendan los combustibles de manera normal y decente? Pregunto, ¿es imposible? O es que las mafias van a poder más que un Estado, que todo un país, que todo un pueblo. ¿Qué magia tienen esas mafias, señor Fiscal?⁶²”. Esta declaración implica, que el crimen organizado es de tal magnitud que el gobierno, aunque quiera luchar contra este, ya no puede.



60 Transparencia Venezuela. “Aliados privados en control de empresas estatales”. Diciembre 2021. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Aliados-privados-en-control-de-empresas-estatales-1.pdf>

61 Oro Mortal. Transparencia Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/12/04-Oro-Mortal.pdf>

62 VTV El Ejecutivo Nacional ordena acabar con mafias de estaciones de gasolina. <https://www.vtv.gob.ve/ejecutivo-ordena-acabar-mafias-estaciones-gasolina-normal-funcionamiento-distribucion-combustible/>



La firma de consultoría Ecoanalítica estimó que en la última década se perdieron 31.331,5 millones de dólares por el contrabando de gasolina.⁶³ En mayo de 2020, en los primeros meses de la emergencia sanitaria por COVID, Nicolás Maduro anunció un nuevo esquema de venta de gasolina subsidiada que pasó a costar 0,027 dólares por litro, mientras que autorizó la venta en dólares de una gasolina a un “precio internacional” a 0,50 dólares el litro, en una red de 200 gasolineras, todo bajo la custodia militar. Esto ha afianzado las oportunidades de corrupción.



EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO. PETRÓLEOS DE VENEZUELA SA - PDVSA

4.1 Políticas que han afectado a Pdvsa:

7/04/2002

Despido de más 20.000 técnicos calificados de la principal empresa de Venezuela, la petrolera Petróleos de Venezuela SA⁶⁴. El personal directivo fue sustituido por personal designado por conveniencia política y se duplicó la nómina en poco tiempo. La empresa pasó de tener 40.385 empleados en 1998 a 113.153 en 2016.

20/11/2004

Rafael Ramírez fue designado presidente de Pdvsa pese a que ya ostentaba el cargo de ministro de Petróleo, ente que ejerce control de adscripción sobre la petrolera estatal. Se mantuvo en ambos cargos hasta el año 2014.⁶⁵

2005

Se desata el control del gobierno sobre las empresas de todos los sectores. Algunas fueron creadas y otras fueron adquiridas mediante expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, reestatizaciones y renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero. Se desconoce el número exacto de empresas propiedad del Estado y mucho menos de aquellas, nacionales o extranjeras, donde el Estado venezolano o alguna de las empresas estatales tenga participación.

4.2 Consecuencias de las políticas públicas relacionadas con Pdvsa:



Las políticas anteriores, unidas a la falta de meritocracia y conflicto de intereses, originaron que Pdvsa durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro haya sido la fuente de lo que para muchos es un saqueo de miles de millones en casos de gran corrupción, por el manejo de cuantiosos recursos en forma discrecional y sin control. Algunos cálculos señalan que Chávez dispuso de más del 70 % de la renta petrolera de 100 años.

La producción fue en declive y no se ha podido recuperar hasta la actualidad.⁶⁶ La principal empresa venezolana en 2023 aún no produce ni gasolina, ni aceite, ni asfalto para satisfacer las necesidades de los venezolanos.

63 Transparencia Venezuela, “Impactos de los incentivos de la corrupción: análisis cuantitativos de las principales actividades económicas ilícitas en Venezuela”, 2018. <https://transparencia.org.ve/project/impactos-de-los-incentivos-de-la-corrupcion-analisis-cuantitativos-de-las-principales-actividades-economicas-ilicitas-en-venezuela/>

64 El Universo de México. Chávez despide a ejecutivos disidentes de Petróleos de Venezuela. <https://www.eluniverso.com/2002/04/07/0001/14/0AC6DA48E7304B7FA7D8059DC4F41E74.html/>

65 Transparencia Venezuela. Pdvsa, combustible de la corrupción. Rafael Ramírez, rojo rojito. <https://transparenciave.org/project/petroleo-historia-7/>

66 Trading Economics, Venezuela Crude Oil Production, October 2019, <https://tradingeconomics.com/venezuela/crude-oil-production>
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR002002.pdf
<https://transparencia.org.ve/project/aportes-fiscales-la-industria-petrolera-disminuyeron-58-17-anos/>



Además, se registraron centenares de casos de corrupción en la industria⁶⁷, entre ellos, la pérdida de más de 4.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra.⁶⁸

Transparencia Venezuela ha registrado por lo menos 68 investigaciones de corrupción que involucran a Pdvsa, que ocurrieron durante la gestión de Rafael Ramírez. Tareck El Aissami, funcionario que ejerció el Ministerio del Petróleo entre abril de 2020 y marzo de 2023, renunció tras el desfalco de Pdvsa-Cripto, revelado desde el mismo gobierno. Hasta mediados de 2023, no había sido imputado de ningún delito, ni se conocía su paradero. El gobierno tuvo que reconocer una parte del desfalco por una cifra de 5.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela elaboró un informe en el que estima que el daño total pudo superar los 16 mil 600 millones de dólares.⁶⁹

Detalle completo de los cambios que incentivaron la gran corrupción en PDVSA lo pueden encontrar en el site Pdvsa Combustible de la corrupción, en los informes *Cómo se fraguó la corrupción en PDVSA y Prácticas de gobernanza que incentivaron la corrupción en la petrolera venezolana*.⁷⁰



POLÍTICAS EN FRONTERAS Y MANEJO DE BANDAS

5.1 Políticas destacadas en zonas fronterizas:

12/01/2008

Hugo Chávez pidió ante la Asamblea Nacional reconocimiento a las FARC y al ELN como beligerantes, es decir, como ejércitos con la misma legitimidad que el de la República de Colombia. El mandatario venezolano llegó a decir, en aquella ocasión, que “las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento (...) son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”.⁷¹

15/03/2009

Chávez ordenó que el Gobierno central asumiera el control de los puertos y aeropuertos. Hasta ese momento los puertos y aeropuertos estaban en manos de gobernadores, en aquel entonces de oposición. Para esto, Chávez se valió de una reforma a la Ley de Descentralización sancionada ese año por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, violando la Constitución. Los puertos son puntos clave para el contrabando y el narcotráfico, entre otros hechos delictivos.⁷²

Maduro ha continuado con la práctica de quitarle las competencias, de manera inconstitucional, a gobernadores opositores sobre puertos y aeropuertos.⁷³

67 Transparencia Venezuela, Pdvsa: Combustible de la corrupción. “Pdvsa produjo tantos ingresos como casos de corrupción”, febrero 2021. <https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-6/>

68 Transparencia Venezuela, “Una historia con impacto internacional”, 2018. <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/10/Una-historia-con-impacto-Internacional.-Informe-de-Corrupci%C3%B3n-2018.-TV.pdf>

69 Transparencia Venezuela. Pdvsa Cripto: una investigación que sorprendió al país. Junio 2023. <https://transparenciave.org/trama-pdvsa-cripto-compromete-mas-16-600-millones/>

70 Transparencia Venezuela. Pdvsa, combustible de la corrupción. <https://transparenciave.org/home-petroleo/>

71 Diario La Nación. Chávez: las FARC “no son terroristas” Lanación.com. “Chavez: las FARC no son terroristas”. 12/01/2008.

72 Reuters. Chávez ordena tomar puertos y aeropuertos en manos de oposición <https://www.reuters.com/article/internacional-comercio-venezuela-chavez-idLTASIE52E0G620090315>. 5/03/2019.

BBC. Chávez ordena toma de puertos https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/03/090316_1400_chavez_puertos. 16/03/2009

Cuba Encuentro. La Asamblea Nacional da poderes al Estado para intervenir en las gobernaciones

<https://www.cubaencuentro.com/txt/internacional/noticias/la-asamblea-nacional-da-poderes-al-estado-para-intervenir-en-las-gobernaciones-162650>

73 La Voz de América. Maduro despoja de competencias a un gobernador opositor <https://www.vozdeamerica.com/a/nicolas-maduro-despoja-competencias-a-un-gobernador-opositor-en-venezuela-6338688.html>



Septiembre 2013

El Movimiento por la Paz y la Vida, perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y que entonces coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos, inició el plan “Zonas de Paz” en centros urbanos ubicados en los estados Miranda, Zulia, Táchira, Aragua, Guárico y Gran Caracas. El objetivo inicial era la pacificación de bandas delictivas, basado en el “respeto” de los territorios controlados por cada grupo criminal. El acuerdo implicaba que el gobierno entregaba recursos económicos y materiales de construcción a las bandas, a cambio de la entrega de sus armas⁷⁴. Las llamadas “zonas de paz” fueron un factor determinante en el crecimiento de las llamadas “megabandas”, grupos de más de 50 criminales, con armas de fuego de alto poder, y una estructura vertical de mando muy bien definida. Con las “zonas de paz”, el gobierno dio a los grupos delictivos reconocimiento, legitimación oficial y territorios sin presencia policial.⁷⁵

5.2 Consecuencias de las políticas en zonas fronterizas

El apoyo abierto a las FARC y el ELN permitió su accionar en Venezuela. Este respaldo hacia las FARC ha continuado a través del tiempo. En Caracas, en 2019, durante el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro señaló sobre dos de los principales líderes de esta organización guerrillera y terrorista: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (...). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.⁷⁶

De acuerdo a los expertos, la magnitud que el tráfico de drogas ha alcanzado en Venezuela se fundamenta en la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos. El Informe Mundial Sobre Drogas, ONU 2017, señaló que “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.

Además, se ha registrado en distintos informes y noticias que el ELN y las disidencias de las FARC participan en el negocio de minería ilegal del oro y el coltán en los estados Bolívar y Amazonas.⁷⁷

El ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela: Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure. Cuenta con emisoras clandestinas para adoctrinar y utiliza al estado Apure, en la frontera con Colombia, como un escondite y actúa allí como un factor estatal de facto, resolviendo controversias entre los ciudadanos y manteniendo algún tipo de “orden”.⁷⁸

Las llamadas “zonas de paz” fueron un factor determinante en el crecimiento en Venezuela de las llamadas “megabandas”, grupos de más de 50 criminales, con armas de fuego de alto poder y una estructura vertical de mando muy bien definida. Con las “zonas de paz” el gobierno dio a los grupos delictivos reconocimiento, legitimación oficial y territorios sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva.⁷⁹

74 Runrunes. 10 claves para entender las zonas de paz. <https://runrun.es/nacional/venezuela-2/212961/10-claves-para-entender-las-zonas-de-paz/#:~:text=Las%20Zonas%20de%20Paz%20fueron,viceministro%20Jos%C3%A9%20Vicente%20Rangel%20%C3%81valos>

75 Transparencia Venezuela. Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Un problema de Estado. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/12/03-Crimen-organizado-y-corrupcion-en-Venezuela.pdf>

76 El Universal.com. “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela”. 28 de julio de 2019.

78 Insight Crimen. ELN en Venezuela. Insight Crime. “ELN en Venezuela”. 1 de marzo de 2019.

79 Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Un problema de Estado. Transparencia Venezuela. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/12/03-Crimen-organizado-y-corrupcion-en-Venezuela.pdf>



Para efectos de este análisis, las distorsiones se interpretan como el resultado de la injerencia criminal en la vida cotidiana de una población determinada, que no es medible a través de cifras o estadísticas; de manera tal que, al detectar más distorsiones en un territorio

determinado, se logra un acercamiento a la intensidad de la actividad criminal en esa localidad. Para facilitar la comprensión de estos planteamientos, las distorsiones son clasificadas de la siguiente manera:

TIPOS DE DISTORSIONES PRODUCIDAS POR LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES





Distorsiones institucionales:

Se trata de las distorsiones en la aplicación de las reglas de juego, que facilitan la operación de los grupos criminales y el funcionamiento de las economías ilícitas y que debilitan la gobernabilidad y la sostenibilidad del sistema democrático, aumentando la vulnerabilidad de los ciudadanos.



Distorsiones económicas:

Se refieren los cambios registrados en las conductas comerciales, financieras y laborales en la vida cotidiana de los pobladores. Estos cambios, reflejados en conductas ilegales, representan un distanciamiento de las conductas comerciales y financieras que deberían desarrollarse en condiciones de seguridad ciudadana y de libre mercado. El ámbito de las distorsiones económicas incluye aspectos generales, pero hace énfasis en las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, contrabando de oro y otros minerales, trata de personas, contrabando de combustible y de chatarra.

Distorsiones políticas:



Se trata de los cambios registrados en las conductas políticas y electorales de los pobladores.

Al igual que en las distorsiones económicas, estos cambios representan un distanciamiento de las conductas políticas y electorales que deberían desarrollarse en condiciones de seguridad ciudadana y de libre ejercicio democrático.



Distorsiones sociales:

Son los cambios registrados en las conductas sociales de los pobladores, que se distancian de aquellas que deberían desarrollarse en un Estado de Derecho pleno.



Distorsiones culturales:

Se trata de las conductas anómicas de los pobladores, alejadas de las conductas culturales que deberían desarrollarse en condiciones de seguridad ciudadana y libre formación de valores. En el registro de información sobre las distorsiones culturales, se toma en cuenta la normalización de la violencia, entendiéndola como la ausencia de indignación moral entre los ciudadanos, y la forma como las comunidades y personas se han acostumbrado, como un hecho cotidiano, a la tortura, homicidio y acciones de terror que inspiran los grupos de crimen organizado. Esta “normalización” es fortalecida por la indefensión de los ciudadanos, apoyo o indiferencia estatal, miedo de las personas y de las comunidades.

En este reporte encontrarán los resultados de la investigación en tres estados fronterizos y con graves problemas de ilícitos: Bolívar, Sucre y Zulia: Tenemos previsto realizar la investigación en otros estados en los próximos meses para continuar incorporando información y evidencias que permitan entender la complejidad de la criminalidad en Venezuela.



BOLÍVAR

El oro como medio y aspiración



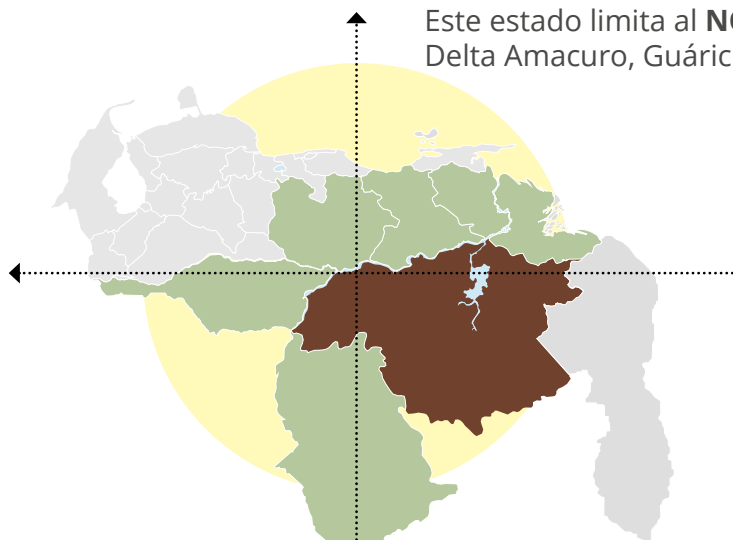
El estado Bolívar es el más grande de Venezuela, con una superficie de 240.528 km², lo que representa el 26,25% del territorio nacional. Sin embargo, allí solo habitan alrededor de 2 millones de habitantes, de los 28 millones que se estima hay en el país, y la mayoría se concentra en Ciudad Guayana (integrada por Puerto Ordaz y San Félix) y Ciudad Bolívar.

Esta entidad es reconocida por sus imponentes ríos, como el Orinoco y el Caroní, así como por sus valiosos parques nacionales con gran biodiversidad, su potencial hidroeléctrico y sus enormes reservas de recursos minerales y forestales. En sus tierras está el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es allí donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo con 1.283 metros.

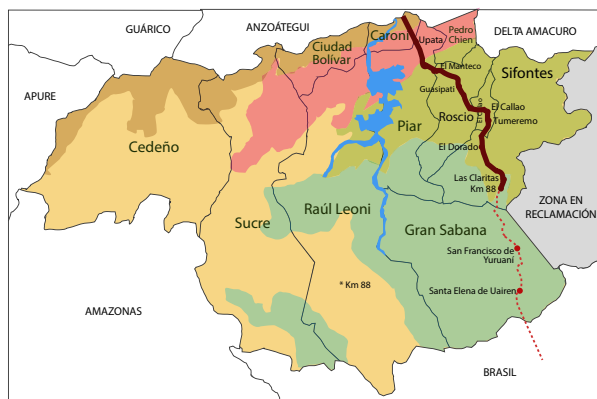
Al **OESTE** con el estado de Apure. Está dividido en 11 municipios: Cedeño, Sucre, Angostura, Piar, Gran Sabana, Caroní, Chien, El Callo, Angostura del Orinoco, Roscio y Sifontes.

Este estado limita al **NORTE** con Monagas, Delta Amacuro, Guárico y Anzoátegui.

Al **ESTE** con la Guayana Esequiba



Al **SUR** tiene frontera con la república de Brasil y el estado venezolano Amazonas.





En el estado Bolívar, como en otras regiones del mundo donde históricamente se han explotado minerales de gran valor económico, han ocurrido una serie de actividades ilícitas que provocan graves alteraciones en los modos de vida de sus habitantes. Pero la creación del llamado Arco Minero del Orinoco en 2016 aceleró la extracción masiva, desordenada e ilegal de los yacimientos de la entidad, y trajo consigo un impacto sin precedentes en esa zona.

Fue en febrero de 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco⁶², con el que autorizó la extracción de minerales en una superficie que comprende 111.843,70 kilómetros cuadrados de Bolívar. Aunque el área supone cerca de la mitad de la superficie del estado, la minería se extiende a lo largo y ancho de la entidad. “El Arco Minero del Orinoco es todo el estado Bolívar y más allá”, suelen decir sus habitantes.

Cuando se creó el Arco Minero del Orinoco, las autoridades aseguraron que el proyecto serviría para incrementar la inversión extranjera en la zona, ordenar la pequeña minería y acabar con el contrabando, sin embargo, los reportes desde el estado coinciden en que un importante porcentaje del oro y otros minerales que se extrae proviene de minas en conflicto y no ingresa a las cuentas nacionales. Gran parte de la explotación ocurre en yacimientos dominados por organizaciones criminales que someten a grupos de mineros que no están formalmente registrados, explotan en áreas no autorizadas, usan recursos prohibidos como el mercurio y carecen de equipos de seguridad personal.

Incluso en las áreas que han sido autorizadas por el Estado para que operen las llamadas alianzas estratégicas, conformadas entre compañías privadas y empresas estatales, la explotación y producción del oro es controversial. Se desconoce públicamente el alcance de los acuerdos a los que se han llegado para otorgar los permisos de explotación, no hay rendición de cuentas sobre niveles de producción y también se incumplen las medidas de seguridad laboral y ambiental que exigen las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

El seguimiento continuo a las dinámicas de la minería en el estado Bolívar, el rastreo de las noticias e informes que se producen en la entidad y las visitas a los pueblos mineros con entrevistas a diversas fuentes calificadas permiten corroborar que la devastación ambiental y la consolidación de las mencionadas estructuras criminales⁶³ están intrínsecamente relacionados con importantes distorsiones institucionales y políticas. Además, su afianzamiento y expansión en el tiempo han contribuido a incrementar esas y otras distorsiones económicas, sociales y culturales.



Distorsiones institucionales

La impunidad al servicio de los criminales.

La llamada fiebre del oro en el estado Bolívar ha estado caracterizada por el control de estructuras criminales que se han apoderado de importantes minas auríferas, mientras mantienen en zozobra a los habitantes de la región y a las demás personas que han llegado desde otros estados en la búsqueda de mejores ingresos económicos.

62 Fue publicado en la Gaceta Oficial No. 40.855 del 24 de febrero 2016

63 Transparencia Venezuela (2022). Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en Venezuela. Disponible en: https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2022/06/LOS-GRUPOS-CRIMINALES-TRAS-LAS-ACTIVIDADES-ILICITAS-EN-VENEZUELA_Cap3.pdf



Estas organizaciones, que anteriormente se conocían como *sindicatos mineros* liderados por pranes⁶⁴ y que ahora se hacen llamar *El Sistema*, no solo participan de la producción ilegal y el contrabando de oro, también están detrás de otros ilícitos como la extorsión a mineros, molinos y comercios, el tráfico de armas, municiones y combustible, la trata de personas y demás formas de esclavitud moderna.

En los poblados mineros son capaces de identificar fácilmente los nombres de las organizaciones criminales en control del territorio. En El Callao se sigue reportando la presencia del sistema de alias “El Totó”; en el Dorado lidera el sistema del “Negro Fabio”; y en Las Claritas y el Km 88 está la banda de “Juancho”, “El Viejo” y su equipo. Además, hay presencia de integrantes del Tren de Aragua y grupos guerrilleros, como se precisa en el informe *Agentes Criminales, interacciones oscuras*.⁶⁵

Denuncias del excomisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama y del primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo, presentadas ante la Asamblea Nacional⁶⁶ refieren que fue la gobernación del estado Bolívar bajo el mandato del general Francisco Rangel Gómez la que contribuyó a la conformación de varias de estas bandas criminales.

Según Curvelo, funcionarios de la gobernación apoyaron el surgimiento y la consolidación de la banda de alias “El Juancho”. El líder de esta organización, Juan Gabriel Rivas Núñez⁶⁷, es

un ciudadano de origen colombiano que se nacionalizó venezolano y que presuntamente consiguió que eliminaran sus datos del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) por homicidios cometidos en el estado Aragua, gracias al apoyo oficial.

El cambio de las autoridades regionales no parece haber impactado el poderío de “Juancho” sobre las minas. Fuentes consultadas para este informe aseguran que en 2023 el líder criminal mantiene relaciones con representantes del gobierno nacional y sigue ejerciendo gran poder sobre la zona gracias a esos apoyos y al respaldo de parte de las comunidades. Sin embargo, no ha sido posible identificar a los funcionarios o efectivos presuntamente involucrados.

El sistema del “Negro Fabio”⁶⁸ también se ha consolidado con el respaldo de funcionarios del gobierno y efectivos de cuerpos de seguridad. Pese a que, en abril de 2021, el fiscal general de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, denunció una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual en la que estaría involucrado el “Negro Fabio”, las autoridades no han actuado en su contra.



El general Julio César Fuentes Manzulli con alias Juancho. Foto del informe entregado por el comisario Jesús Curvelo a la AN

64 Término proveniente de las cárceles venezolanas usado para referirse a los líderes criminales.

65 Transparencia Venezuela. Agentes Criminales, interacciones oscuras <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/agentes-criminales-interacciones-oscuras-los-agentes-que-lideran-las-economias-ilicitas/>. Agosto 2023.

66 La Causa R. (2016). Informe del comisario Jesús Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes mineros al sur del estado Bolívar. Disponible en: <https://es.slideshare.net/LaCausaRve/informe-de-comisario-curvelo-del-sebin-revela-nexos-de-la-gobernacin-con-pranes-mineros-al-sur-del-estado-bolvar>

67 Perfil de la banda de “El Juancho”. Disponible en: <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/banda-de-juancho-2/>

68 Perfil de la banda del “Negro Fabio”. Disponible en: <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/banda-del-negro-fabio/>



El “Negro Fabio” mantiene su poder en las minas de El Dorado y es capaz de salir e ingresar al país sin inconvenientes. El proceso penal que se inició a raíz de la denuncia de Saab en el estado Bolívar debió ser trasladado a Caracas porque los acusados podían “persuadir a las instituciones para liberarse de la responsabilidad penal que pesa en su contra”, según el expediente.⁶⁹



El “Negro Fabio”

Con la llamada Operación Escudo Bolivariano, desde finales de 2022 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desarrollado una serie de operaciones militares en pueblos mineros del estado Bolívar que han logrado replegar a algunas organizaciones criminales como la llamada Organización R o 3R que tenía control sobre Tumeremo, pero el resto de los sistemas continúan ejerciendo su poder. La “invasión” militar, como llaman algunos locales a los operativos no ha sido general.

Hasta ahora tampoco se conoce si la justicia venezolana ha procesado o castigado alguna denuncia presentada por víctimas de las organizaciones criminales de Bolívar.



Distorsiones económicas

El afán por el oro. En el estado Bolívar la principal economía ilícita es la del oro, pero no se limita a su contrabando. La explotación, producción y comercialización ilegal del mineral genera los mayores ingresos para los distintos agentes involucrados en estas actividades. Durante 2022 y 2023 la producción de oro en Venezuela siguió aumentando y aunque hay un esfuerzo claro y creciente de control del negocio por parte del gobierno nacional, los porcentajes de distribución de los ingresos tienen pequeños cambios en relación con 2021.

En el estado Bolívar también hay explotación y comercio ilegal de otros minerales como diamantes, coltán y rodio, según informes internacionales, pero en porcentajes menores respecto al oro. El peso de estas actividades se analizará en la próxima entrega de *Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad*.

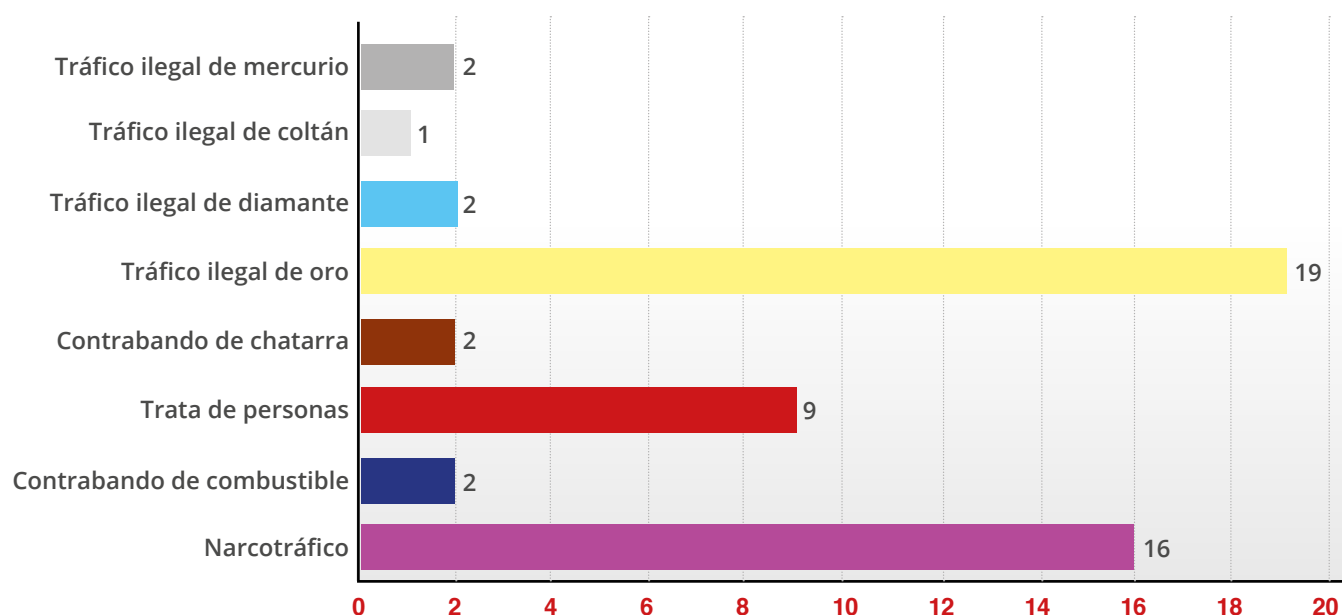
En la visita de campo se verificó que alrededor del negocio del oro existen otros ilícitos que ayudan a incrementar los ingresos de todos los agentes involucrados: el tráfico de armas, con las que las organizaciones criminales mantienen el control de sus territorios; la venta irregular de combustible, esencial para el funcionamiento de plantas eléctricas, martillos hidráulicos, molinos y otros equipos usados para la explotación; la trata de personas, que en el estado Bolívar tiene forma de esclavitud moderna, bajo coacción por necesidades extremas; el tráfico de sustancias ilícitas como el mercurio; el tráfico de drogas, principalmente para el consumo entre trabajadores de las minas.

69 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sala Penal. Sentencia No. 045 del 22 de junio 2021. Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/312400-45-22621-2021-R21-53.HTML>



El registro previo realizado sobre informaciones y reportes del estado Bolívar corrobora que el tráfico ilegal de oro, trata de personas y narcotráfico son las principales economías ilícitas⁷⁰, tal como se describe en el siguiente gráfico:

CANTIDAD DE ILÍCITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO BOLÍVAR SEGÚN NOTICIAS Y REPORTES



El auge de estos ilícitos ha ido desplazando a otras actividades económicas formales, como la ganadería. En fincas del interior del estado en las que anteriormente se criaba ganado y se producía leche, quesos y otros productos, ahora se están abriendo huecos para sacar oro y otros minerales considerados como estratégicos por parte del Estado.

Ante las presiones de las organizaciones criminales y el cobro de extorsiones, muchos comerciantes han decidido cerrar sus negocios, irse del estado o dedicarse a otras actividades. El desplome de la producción de las empresas básicas, ubicadas en las principales ciudades del estado, también ha llevado a más personas a apostar por actividades ilícitas.

El oro tiene tanta relevancia en la entidad que desplazó al bolívar como moneda de intercambio. Muchas de las transacciones que se realizan tanto en los pueblos mineros del estado Bolívar como en el resto de la entidad son pagadas con puntos o gramos de oro. Desde el alquiler de una red de wifi hasta una hamburguesa se cotizan en oro. Algunas personas entrevistadas en la región aseguran que allí los precios de los productos son más altos que en el resto del país, pero no se recabaron suficientes evidencias para confirmar esto.

⁷⁰ De acuerdo al rastreo en medios y publicaciones de organizaciones, la mayoría de las economías ilícitas se registran en los municipios Sucre (mina El Silencio), Sifontes (Tumeremo, mina El Bochinche), El Callao (El Perú), Caroní (Puerto Ordaz), Gran Sabana, Heres (Ciudad Bolívar), Cedeño (Caicara del Orinoco), Angostura del Orinoco (Maruhanta).



Distorsiones políticas

El respaldo al poder. Las organizaciones criminales que están detrás de las economías ilícitas que se registran en el estado Bolívar han sido vinculadas con la política por diversas vías. No solo hay reportes del respaldo de funcionarios de la gobernación de la entidad al surgimiento y la consolidación de esos grupos, también hay indicios de la ayuda de criminales a campañas electorales de algunos candidatos regionales.

En noviembre de 2019, circularon en El Callao dos comunicados atribuidos a la banda de alias “El Totó”⁷¹ en los que se hacían graves acusaciones contra el exalcalde de la zona, Alberto Hurtado. En los textos que presuntamente redactó el cabecilla se leía: “Te dimos (al alcalde) medio kilo de oro para tu campaña para el Congreso y ganaste. Volviste y te di 650 gramos para llegar a la alcaldía y ganaste. Nos vendiste y no hiciste nada por nosotros”. Meses antes, Hurtado también había sido vinculado con la banda criminal, pero negó que eso fuera cierto.

La Organización R⁷² también habría apoyado la candidatura de Daniel Romero, a la alcaldía del municipio Sifontes. Romero se postuló con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) que se alejó del oficialismo y solicitó la repetición de las elecciones porque fue excluido de la votación por una renuncia que nunca emitió.⁷³

Desde entonces la Organización R siguió manifestado interés en cargos políticos. A través de la llamada Fundación 3R, una supuesta organización benéfica, empezaron a repartir ayudas económicas en Tumeremo. Repararon canchas deportivas, abastecieron

centros de salud con medicinas e insumos médicos y construyeron escuelas.

La Organización R fue una de las más atacadas a finales de 2022 por la operación Escudo Bolivariano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuentes consultadas en el estado Bolívar creen que los militares se afincaron en esta organización precisamente por sus aspiraciones políticas.



La Organización R

“Los operativos militares de finales de 2022 impactaron principalmente a la organización 3R que se tuvo que replegar. Hay indicios de que se enfocaron en ese grupo porque su líder, conocido como el Run, tenía aspiraciones políticas. Por eso uno duda de los operativos, porque pareciera que solo quieren sacar a unos que les molesta para meter a otros”, dijo una investigadora de la zona.

En 2023 casi todos los alcaldes de los municipios mineros del estado Bolívar son del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a excepción del alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, que ganó con la tarjeta de oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, y los partidos Convergencia y Bolívar Joven.

No hay evidencias sólidas de que los aspirantes a un cargo público de elección popular deban pedir autorización a representantes de un grupo de crimen organizado para poder inscribirse o para poder llevar a cabo sus actividades.

⁷¹ Perfil de la banda de El Totó. Disponible en: <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/banda-del-toto-y-zacarías/>

⁷² Perfil de la Organización R. Disponible en: <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/organizacion-r/>

⁷³ Siverio, J. Crónica Uno. (2021). CNE declina al TSJ impugnación de elecciones en Sifontes estado Bolívar. 06 de diciembre. Disponible en: <https://cronica.uno/cne-declina-al-ts-j-impugnacion-de-elecciones-en-sifontes-estado-bolivar>



Distorsiones sociales

El equilibrio de la violencia. Entre 2022 y 2023 no se han registrado episodios de extrema violencia en el contexto minero como los que ocurrieron en años anteriores cuando en un solo enfrentamiento podían morir o desaparecer decenas de personas. Las organizaciones criminales en la zona se han consolidado tanto que no tienen necesidad de provocar masacres porque ya cuentan con el reconocimiento de otros grupos, de representantes del gobierno y fuerzas de seguridad, además de algunos pobladores.

Los líderes de varias de estas organizaciones criminales han sabido ganarse el respeto y hasta la admiración de los pobladores de los municipios mineros, entre otras cosas porque los han ayudado a suplir sus necesidades más básicas en medio de la crisis nacional. Sistemas como el de “Juancho” y su equipo o el del “Negro Fabio” han desarrollado estructuras capaces de cumplir funciones similares a las que debería ejercer el gobierno nacional. Tienen programas de repartición de alimentos para las poblaciones más vulnerables, restauran y construyen escuelas, dotan los hospitales y ambulatorios y hasta organizan actividades recreacionales.

“La gente se refiere a ellos como el gobierno local porque los grupos delictivos son capaces de resolverles sus problemas. Desde conflictos con otros vecinos hasta sus necesidades básicas. Les distribuyen bolsas de comida, les garantizan que tengan ambulancias, se encargan de las actividades deportivas o recreacionales en fechas como el Día del Niño o Navidad. Llevan a sanidad para hacer despistaje de enfermedades de transmisión sexual de las mujeres. Controlan la velocidad en la que pueden circular las motos y hasta deciden

cuán alto se puede escuchar la música”, agregó la representante de un reconocido centro de estudio en Bolívar.

Muestra de las “actividades sociales” de los grupos delictivos es el principal centro de salud que hay en Las Claritas. Según varias de las fuentes consultadas, el establecimiento está en mejores condiciones que muchos de los hospitales que hay en grandes ciudades de Venezuela como Caracas. El lugar cuenta con médicos a toda hora, insumos quirúrgicos, aire acondicionado operativo en las habitaciones y hasta un chef que se encarga de cocinar el desayuno, almuerzo y cena para el personal y los pacientes

“Ese centro de salud tiene hasta un horno crematorio que no hay en otros hospitales del estado. Todo está limpio y funciona”, agregó una activista de la entidad que con frecuencia hace visitas al lugar. Dijo que estas organizaciones ayudan con el pago de maestros y hasta garantizan transporte público para que los niños que viven en minas puedan llegar hasta las escuelas.

Más ejemplos de las “labores sociales” de los grupos criminales en control de yacimientos mineros se pueden conseguir en las redes sociales de la Fundación Corazón de Azúcar, creada por el “Negro Fabio”, así como en las cuentas propias del líder de la banda, Fabio González.⁷⁴

“Nos encontramos en las instalaciones del CDI Brisas del Cuyuní. El día de hoy estamos recibiendo una ambulancia 0 km de parte de la Fundación Corazón de Azúcar, por su representante oficial, el Sr. González (...) En la ambulancia tenemos depósito de oxígeno, silla de ruedas, tensiómetro, estetoscopio, oxímetro y algunos medicamentos para primeros auxilios”, se escucha decir a un trabajador del sector salud en un video publicado en junio de 2023 en las redes sociales del “Negro Fabio”.

74 Transparencia Venezuela (2022). Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en Venezuela. Disponible en: https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2022/06/LOS-GRUPOS-CRIMINALES-TRAS-LAS-ACTIVIDADES-ILICITAS-EN-VENEZUELA_Cap3.pdf



En otras publicaciones también es posible ver la inauguración de una escuela en el sector Payapal, la restauración de una cancha en Los Naranjos, la repartición de bolsas de sardinas y la entrega de juguetes para niños a propósito del Día de Reyes en enero. “Este es un sueño hecho realidad gracias a la Fundación Corazón de Azúcar”, dice una de las mujeres grabada en video.

Este tipo de acciones han hecho que se produzcan importantes distorsiones sociales dentro de las comunidades mineras. Muchos pobladores sientan respeto y hasta admiración por las organizaciones criminales porque les ayudan a cubrir sus necesidades más básicas. Además, llegan a normalizar tanto las actividades ilícitas como la violencia que está presente en la zona.

Pobladores entrevistados en Bolívar aseguran que si siguen “las reglas” impuestas por el *sistema*, no les va a pasar nada. Aseguran que solo hay castigos para aquellas personas que no obedecen o se comen la luz.

Aunque se han reducido las masacres, la violencia y la presión de los grupos criminales sigue presente. Las organizaciones delictivas ejercen especial presión sobre niños, niñas y mujeres jóvenes, los primeros suelen ser captados para que sirvan al grupo como vigilantes o para que se metan en minas tan angostas en las que un adulto no podría entrar; las segundas suelen ser captadas con fines de explotación sexual.



Distorsiones culturales

Los pueblos originarios arrasados. En las minas ubicadas en la vía a San Martín de Turumbán, al margen del río Cuyuní en el municipio Sifontes, donde hacen vida distintas comunidades indígenas, se han apostado grupos guerrilleros cuya identidad no está plenamente confirmada. Estas organizaciones no solo controlan el acceso a los yacimientos auríferos de la zona y cobran vacunas, también quieren imponer sus reglas en otros aspectos de la vida como los servicios públicos y hasta la administración de las escuelas.

Estos grupos están mucho más organizados que los *sistemas*, dicen tener planes de expansión a largo plazo e insisten en que cuentan con el respaldo de “autoridades de Caracas”. Lucen ropas camufladas, con pañuelos, lentes oscuros y no les faltan armas de gran calibre.

Las organizaciones criminales, sistemas o guerrillas, han logrado seducir y sumar a sus filas a algunos miembros de comunidades indígenas lo que ha generado conflictos internos entre los pueblos originarios. Mientras algunos líderes son amenazados y forzados a salir de Venezuela por negarse a la destrucción ambiental en sus tierras, otros terminan por unirse a las actividades extractivistas y de presión para su gente.

“Toda esta situación atenta contra los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. La minería no solo está destruyendo su entorno, les produce enfermedades como la tuberculosis o la malaria, los hace enfrentarse entre ellos. En ese contexto hay muchos episodios de violencia de los que uno no siempre se entera”, añadió el representante de una organización de defensa de los pueblos indígenas.

Agrega que estos grupos criminales hacen que los jóvenes de las comunidades indígenas poco a poco se alejen de sus costumbres a cambio de drogas, teléfonos celulares y hasta armas.



Las minas como ambición Pese a la consolidación de los grupos criminales en los pueblos mineros y los reportes sobre desapariciones forzadas, auge de enfermedades y trabajo esclavo en la zona, las minas auríferas del estado Bolívar siguen siendo el destino escogido por muchos venezolanos que desean obtener mejores ingresos económicos ante la crisis.

Aunque durante 2022 se sintió una ligera recuperación económica en algunos sectores de la sociedad, en los últimos meses del año y el primer semestre de 2023 la situación solo ha empeorado lo que sigue empujando a muchas personas a las minas en la búsqueda de recursos para vivir.

“Nuestras investigaciones indican que el estado Bolívar es origen, tránsito y destino. Origen porque la gente del mismo estado migra hacia Brasil y otros lugares buscando mejores fuentes económicas. Tránsito porque aquí llegan personas del centro o norte del país que solo quieren pasar a Brasil o a Guyana. Finalmente somos destino porque hay mucha gente del mismo estado o de otras entidades que vienen es para instalarse en los pueblos mineros y explotar oro”, afirmó una investigadora de la zona.

La entrevista a mineros en los yacimientos auríferos permite confirmar estas afirmaciones. En el sector El Perú de El Callao trabaja un hombre joven proveniente del estado Anzoátegui. Pasa tres meses trabajando dentro de la mina y luego se regresa un tiempo para su casa. Ha llegado a ir a la zona hasta con su esposa y sus tres hijos, uno de ellos es apenas un bebé.

Venezolanos que quieren salir del país también optan por internarse primero en las minas con el propósito de poder reunir algo de dinero y seguir. “Todavía hay mucha gente que cree que de la noche a la mañana va a conseguir un kilo de oro y se va a hacer rico, pero eso no es así, puedes pasar días y noches llenando sacos

con material y apenas conseguir unos pocos puntos de oro”, agregó la representante de una organización de la sociedad civil en Puerto Ordaz, capital del estado Bolívar.






Entre los jóvenes de las comunidades más vulnerables de Puerto Ordaz es sencillo escuchar el deseo de ir a trabajar en los yacimientos de oro. Sostienen que no hay suficientes fuentes de empleo que les resulten más atractivas. Además, deben vivir en contextos de gran pobreza, con fallas en servicios públicos como el agua, con hospitales desabastecidos, altos niveles de desnutrición y pocas alternativas para desarrollarse profesionalmente.

En ciudades como Puerto Ordaz, donde están importantes empresas básicas que otrora representaron grandes oportunidades de empleo, ahora solo se produce en niveles mínimos. Aunado a eso, muchos comercios que permanecían abiertos con bajos niveles de venta han tenido que cerrar sus puertas entre otras cosas por las elevadas tarifas que le cobra la empresa de desechos sólidos Fospuca, contratada por la alcaldía.

En la zona hay documentados casos de adolescentes que se van desde muy jóvenes a las minas. Dicen que su trabajo es ser cocineras, pero en realidad se van a prostituir en esas zonas. También hay denuncias de trata, muchachas que se van engañadas y que no pueden regresar cuando así lo desean.

Los entrevistados coinciden en que las minas de oro están presentes en todos los hogares de las poblaciones más vulnerables del estado Bolívar, incluso en las ciudades en las que no se practica la minería. Es muy común que algún integrante de las familias esté vinculado con la actividad minera porque ha explotado oro directamente o porque ha ido a vender algo a esas zonas. “Es su día a día, no ven esperanza en otra cosa”, añadió una de las fuentes.



DISTORSIONES EN EL ESTADO BOLÍVAR	
TIPO	DISTORSIONES REGISTRADAS
 <p>INSTITUCIONALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas públicas nacionales que incentivaron el crimen organizado. Creación del Arco Minero del Orinoco en un contexto de elevada opacidad, sin presentación de informes ambientales y sociales, con ausencia de rendición de cuentas. • Inacción de los cuerpos de seguridad y defensa frente a todas las organizaciones criminales. • Impunidad. Influencia del crimen organizado en decisiones judiciales.
 <p>ECONÓMICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auge de actividades económicas ilícitas, como el contrabando de oro y el tráfico de armas, drogas y combustible. • Venta de combustible y otros bienes a precios más altos que el promedio nacional. • Cobro de extorsión o “vacunas” a comercios formales. Incluyendo los molinos en los que se procesa el oro. • Sustitución parcial del dinero por el oro como moneda de intercambio. • Pocas alternativas de empleo en actividades lícitas.
 <p>POLÍTICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vinculación de integrantes del gobierno regional y de cuerpos de seguridad y defensa con el crimen organizado. • Supuesto financiamiento del crimen organizado a candidatos políticos.
 <p>SOCIALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Control de los grupos irregulares sobre casi todos los sectores de la vida en las zonas mineras: educación, salud, alimentación, entretenimiento... • Normalización y justificación de los actos violentos por parte de los ciudadanos • Admiración y respeto de algunos ciudadanos con organizaciones criminales • Desplazamiento de comunidades indígenas y criollos por la minería.
 <p>CULTURALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alteración de formas de vida de comunidades indígenas. • Pérdida del valor de la vida y del trabajo • Adaptación a las reglas de las economías ilícitas • Aspiración de jóvenes a participar en las economías ilícitas.



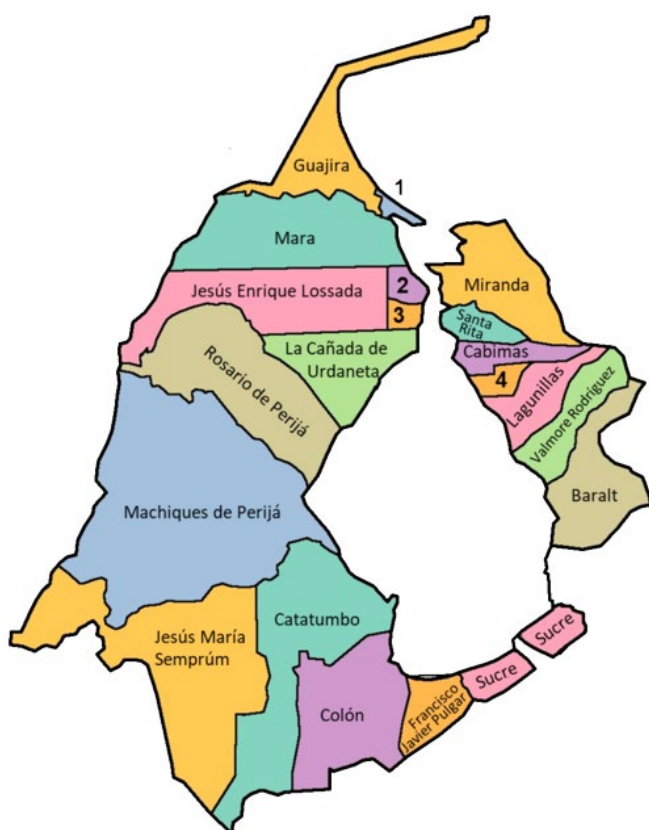
ZULIA

Narcotráfico, la confluencia de la complicidad, el poder y el control social



Zulia está ubicado al extremo noroccidental de Venezuela. Llegó a ser el estado de mayor producción petrolera del país. Tiene una superficie de 63.100 kilómetros cuadrados que rodean el Lago de Maracaibo, la masa de agua más grande de América Latina, y es el estado más poblado. Esta entidad tiene 1.253 Kilómetros cuadrados de costas. Limita al oeste con Colombia, y al norte con el Mar Caribe y el Golfo de Venezuela. Al sur conecta con los estados Mérida y Táchira.

Este estado tiene 21 municipios y tiene una población estimada de 3.833.9351 habitantes⁷⁵. La extensa línea fronteriza con Colombia de unos 600 kilómetros, presenta una alta movilidad migratoria en los pasos de Paraguachón y Maicao.



Zulia es clave en el tránsito de la droga proveniente de Colombia, con presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos criminales que viven y transitan entre Colombia y Venezuela. El trabajo de campo permitió relevar información directamente de representantes de sectores económicos, autoridades regionales y municipales, legisladores, activistas de la sociedad civil en organizaciones nacionales e internacionales con actividad en la zona, representantes de grupos poblacionales, defensores de derechos humanos y periodistas de la región⁷⁶. Las entrevistas realizadas y la comprobación de la información, permitió fortalecer el análisis sobre la actividad e impacto de las economías ilegales y de la criminalidad en la institucionalidad y en la cotidianidad del zuliano.

⁷⁵ UCAB. Insoencovi. Disponible en; <https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicadores-demograficos/>

⁷⁶ La identidad de los entrevistados para este análisis se reserva por seguridad.



Los resultados obtenidos a través de la base de datos, producto del rastreo de informaciones publicada en medios de comunicación sobre la criminalidad en el estado Zulia, son consistentes con lo encontrado en campo en cuanto a los delitos de mayor impacto. Para el período que nos ocupa, 2022 y el primer semestre de 2023- *el narcotráfico es el delito de mayor gravedad*. La trata de personas estaría en segundo lugar, de acuerdo al seguimiento hecho a las publicaciones y a las entrevistas realizadas. Pero del aporte de las fuentes consultadas en el sitio se evidenció que la extorsión violenta es otra de las grandes preocupaciones en este estado. El contrabando de combustible, de alimentos, y de chatarra, así como en menor medida la explotación ilegal de ciertos minerales no preciosos, completan la contribución de las personas consultadas sobre los ilícitos registrados en esta zona de Venezuela.

La capital del estado Zulia, Maracaibo, mostró una cara desolada cuando se realizó esta visita, aunque llegó a ser la segunda ciudad en importancia económica de Venezuela. Encontramos una ciudad con tránsito vehicular reducido, en medio de la grave escasez de combustible, locales comerciales y de viviendas abandonadas, el comercio en general con actividad hasta tempranas horas de la tarde, son algunos de los indicios de lo débil que está este estado fronterizo.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los municipios del sur del estado, y las bandas criminales en el norte, son las organizaciones con actividad criminal con control de sectores y territorio en algunas zonas y con alto impacto sobre la población zuliana.

La violencia, y la extorsión es parte de la cotidianidad zuliana. Escuchar que lanzaron una granada, que un niño recoge chatarra, que familias enteras trabaja en cultivos de drogas raspando coca o apoyando los negocios y actividades conexas para subsistir, que los Yukpas venden gasolina a granel, que el suministro de gas en Los Puertos de Altigracia fue restituido con el apoyo de grupos criminales o que la moneda no es el bolívar sino el peso colombiano; son irregularidades que son comunes en todas las entrevistas.

A continuación, presentaremos el impacto de estos ilícitos en función de las distorsiones que genera en el ámbito institucional, económico, político, social y cultural.



Distorsiones institucionales

Simbiosis militares- guerrilla. El tráfico de drogas a través del estado Zulia continua en aumento sostenido y con procesos, grupos criminales y rutas cada vez más creativas y estables. No existen decisiones gubernamentales que respondan con eficacia al tamaño del problema, y la percepción es que existencia de precario equilibrio entre las autoridades locales y regionales y quienes realmente tiene el control del territorio: los militares⁷⁷ y la guerrilla.

A mediados de mayo de 2023 una avioneta presuntamente cargada con drogas cayó al Lago de Maracaibo, derribada por funcionarios de seguridad del Estado⁷⁸. Las autoridades informaron sobre el incidente, pero no se supo si hubo detenidos. Una fuente consultada mostró sus reservas en relación con la efectividad de las autoridades militares⁷⁹.

77 En Zulia opera la Zona Operativa de Defensa Integral N°11 (ZODI) de la FANB. También la llamada la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, que abarca Zulia, Falcon y Lara.

78 Correo del Caroní. Interceptan nave hostil que sobrevolaba el lago de Maracaibo. [https://correodelcaroni.com/region/sucesos/interceptan-aeronave-hostil-que-sobrevolaba-el-lago-de-maracaibo/#:~:text=%E2%80%9CA%20trav%C3%A9s%20del%20Sistema%20Aeroespacial,por%20nuestra%20Aviaci%C3%B3n%20Militar%20Bolivariana](https://correodelcaroni.com/region/sucesos/interceptan-aeronave-hostil-que-sobrevolaba-el-lago-de-maracaibo/#:~:text=%E2%80%9CA%20trav%C3%A9s%20del%20Sistema%20Aeroespacial,por%20nuestra%20Aviaci%C3%B3n%20Militar%20Bolivariana.). 16/05/2023

79 Hasta el primer trimestre de 2023 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguraba que haber derribado 13 aeronaves vinculadas a narcotráfico y contrabando. En 2022 el total habría sido de 42 avionetas. De esa información no se desprende si hubo o no detenidos y tampoco si alguien fue sancionado por la justicia. Disponible en Infobae. Venezuela derribó una nave hostil en una localidad fronteriza con Colombia. <https://www.infobae.com/venezuela/2023/04/10/venezuela-derribo-una-aeronave-hostil-en-una-localidad-fronteriza-con-colombia/> 10/04/2023



Los testimonios coinciden en la presunta relación entre militares e irregulares colombianos y en algunos casos ha sido detenidos efectivos militares en operaciones antinarcóticos.⁸⁰ Según una fuente en ocasiones hay supuestos desencuentros entre militares y guerrilleros como el ocurrido con un general del ZODI que fue detenido en 2019 por presuntamente colaborar con el narcotráfico. Lo que habría ocurrido es que el militar no respetó los acuerdos y trató de “controlar todo y la guerrilla se molestó”.⁸¹

A finales de 2022, se inició la llamada Operación Relámpago del Catatumbo, coordinada por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) en los municipios Catatumbo, Paéz y Jesús María Semprún.⁸² Fuentes periodísticas consultadas manifestaron sus dudas frente al alcance de estas acciones militares. Aseguraron que esa operación militar fue la respuesta a la presunta falta de acuerdo entre los carteles de la droga. Para mayo de 2023, el ELN sigue actuando públicamente en esos tres municipios.

Se hizo referencia a que en 2020 tres mexicanos fueron detenidos tras precipitarse la aeronave en la que viajaban. Durante su encarcelamiento habrían contribuido con la remodelación del Comando de la Guardia Nacional en Cabimas y luego se escaparon.



Destruyen otra «narcoavioneta» en pista clandestina ubicada en Zulia

Sobre este episodio no se encontró registro en el registro de informaciones realizado para esta investigación. Una fuente dijo que la relación entre el Cartel de Sinaloa y algunos efectivos de la Guardia Nacional es tan grande que “comen juntos en Semprún”.

Algunos testimonios hablan de la proliferación de pistas clandestinas usadas para el tráfico de drogas, que se estiman en más de 200 desde el eje de Rosario de Perijá hasta Colombia, en los municipios Machiques, Semprún, Catatumbo y Colón. Se insistió en que la ubicación de las pistas es un secreto a voces. Incluso se señaló que los cambios en los altos mandos de la Fuerza Armada en la zona no se traducen en el control de los grupos dedicados al narcotráfico. Para ilustrar este punto, un entrevistado relató que cuando es designado un nuevo jefe militar en este estado una de sus primeras medidas

80 Según la periodista Sebastiana Barráez, en noviembre de 2022, fueron detenidas cuatro personas de una banda dedicada al narcotráfico. Supuestamente entre los detenidos se encontraba un sargento supervisor, hombre de confianza de su comandante de destacamento. Disponible en Infobae: Una detención revela la gravedad de lo que se oculta en la Fuerza Armada venezolana sobre el narcotráfico (<https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/11/una-detencion-revela-la-gravedad-de-lo-que-se-oculta-en-la-fuerza-armada-venezolana-sobre-el-narcotrafico/>)

81 El Pitazo. Claves | General Lapadula: de enemigo de la guerrilla a colaborador del narcotráfico. <https://elpitazo.net/occidente/claves-general-lapadula-de-enemigo-de-la-guerrilla-a-colaborador-del-narcotrafico/> 28/10/2019.

82 Defensa.com. Fuerzas Armadas de Venezuela inician la operación militar “Relámpago del Catatumbo” contra grupos subversivos colombianos. <https://www.defensa.com/venezuela/fuerzas-armadas-venezuela-inician-operacion-militar-relampago> 3/05/2022.
Superintendencia nacional antidrogas. Operación Relámpago del Catatumbo. <https://www.youtube.com/watch?v=SFm6ZZamA6M>



es bombardear algunas pistas, para llamar la atención de los “negociadores” de los carteles y lograr así algún tipo de acuerdo. Luego, el terreno bombardeado se restaura para que siga activa la pista.

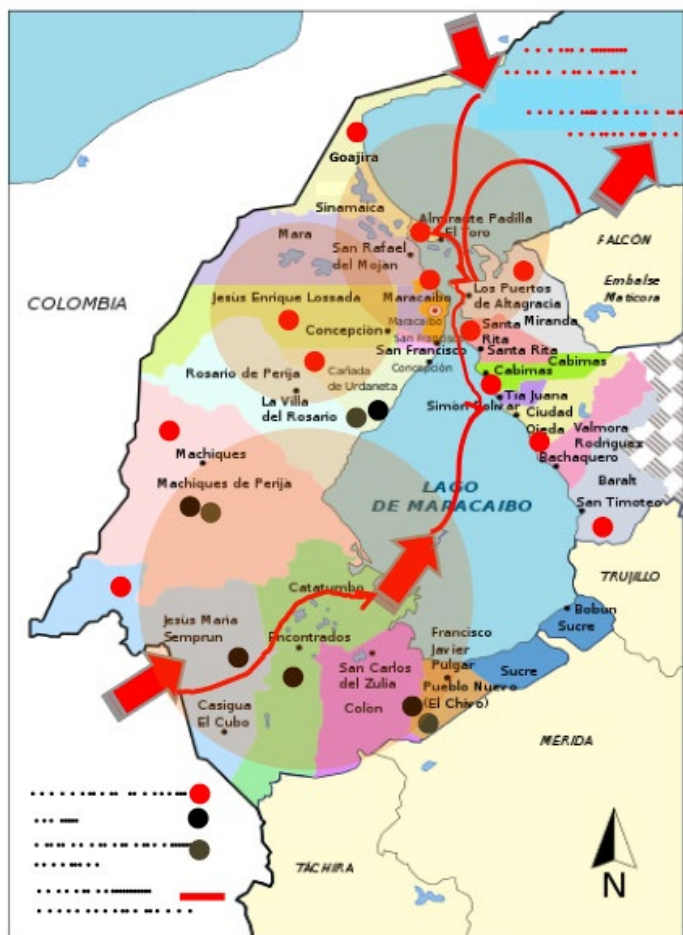
Refieren que desde 2020, supuestamente algunos funcionarios cerraban en las noches la llamada Troncal 6 para que aterrizaran las avionetas cargadas con narcóticos y que para facilitar la operación se disponía de las luces de motocicletas, dispuestas a los lados de la vía, para iluminar el recorrido.

El procedimiento de descarga de la droga de la aeronave es relativamente rápido de acuerdo a este testimonio: “Aterrizar, cargar, pagar dura como 25 minutos”. También se explica que este método de cerrar esa vía ha disminuido porque el número de pistas se habría incrementado.

En la zona suroccidental del estado Zulia operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, José María Semprún, Catatumbo, San Carlos del Zulia y Francisco Javier Pulgar. La droga cruza la frontera por varios sectores de la Sierra de Perijá y tiene dos tipos de rutas, una aérea por las pistas clandestinas, y otra fluvial, por la desembocadura del río Tarra llegan a las orillas del Lago de Maracaibo y con embarcaciones rápidas lo atraviesan hasta Los Puertos de Altagracia, y de allí a las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), y a Centro América.

De la información recogida y la aplicación de los instrumentos de verificación, se desprende que en el norte del estado, los municipios Guajira, Mara, Enrique Lozada, Almirante Padilla, Miranda, La Cañada de Urdaneta, algunos de la costa oriental del lago de Maracaibo y -en menor medida- en los municipios Maracaibo y San Francisco, operan narcotraficantes. Los consultados no creen que se realicen acciones efectivas contra estos grupos.

Hay organizaciones criminales al norte del estado que aplican la extorsión a comerciantes, industriales y hasta vecinos, sin territorios diferenciados por grupos, sobre todo en Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta y Santa Rita. Distintos grupos criminales extorsionan a los mismos negocios y personas lo que ha producido desplazamientos internos y abandono de sectores y viviendas. En la Costa Oriental del Lago también existen bandas criminales, pero con menos poder según los testimonios.





GRUPOS CRIMINALES Y RUTAS DEL NARCOTRÁFICO EN ZULIA

Policías locales debilitadas



Los policías municipales tienen “poco pie de fuerza” y reducido margen de acción. La autoridad real y legal la tiene la ZODI y la REDI, que tienen el control de la estrategia, los operativos, los equipos y las armas. El territorio zuliano, como en todos los estados, está dividido en los llamados cuadrantes de paz⁸³, donde ejercen tareas de seguridad, defensa e investigación, mientras que los funcionarios policiales locales solo tienen funciones administrativas. Esto son contar con la baja remuneración, por lo que están expuestos a corruptelas en un escenario de alta incidencia delictiva, con alto flujo de dinero proveniente del delito.

Los números también indican debilidad. Solo la capital, Maracaibo, requiere de 1.200 funcionarios, pero en 2023 solo cuenta con 590 policías. Hay alcaldías que no tienen cuerpos policiales, como Jesús Enrique Lossada y Semprún, y los municipios que sí tienen cuentan con pocos funcionarios. Aunque la fuerza policial fuese robusta, la realidad es que en Zulia son los militares, la Policía Nacional

Bolivariana (PNB) y la Policía del Estado Zulia, los que se encargan de la seguridad.

Un funcionario destacado en Maracaibo aseguró que los organismos de seguridad, dependientes del gobierno central, “dan de baja” cuando se lo proponen a los integrantes de las mafias que ejercen la extorsión violenta con granadas. Aseguró que son eventuales los operativos contra las bandas, en especial cuando el hecho causa escándalo más allá de las fronteras del estado Zulia.

El otro aspecto a resaltar es que entre los consultados hay una percepción negativa sobre el accionar de los cuerpos de seguridad en el Zulia. Algunos refirieron que el cabecilla de una banda apodado el “El Yiyi” es señalado de pagar sobornos a funcionarios policiales. Otros mencionaron supuestos pagos fijos a funcionarios de seguridad por parte de los Grupos Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), una de las denominaciones que utiliza la estructura militar para definir a las bandas criminales.

Temor a la denuncia



Los entrevistados coincidieron en que hay desconfianza en los organismos de seguridad

⁸³ Así es definido desde el Poder Ejecutivo este concepto relacionado con la seguridad: “Se entiende por Cuadrante de Paz a la unidad básica de organización territorial, geográficamente delimitada, como parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y la Defensa Integral de la Nación; donde se ejecutan las funciones que garanticen el desarrollo de los ámbitos sociocultural, educativo, económico, ambiental y político, así como el resguardo de la integridad física, psicológica, moral y espiritual de las personas y los bienes ante cualquier riesgo o vulnerabilidad”. Cuadrantes de paz. Disponible en http://www.mppriip.gob.ve/wp-content/uploads/2019/07/CUADRANTES_DE_PAZ.pdf



y el sistema judicial. La precaución y el miedo ahuyentan la denuncia.

Una fuente se refirió a la precariedad de la seguridad de los productores agrícolas con respecto a las pistas de aterrizaje clandestinas. Si denuncian públicamente la existencia de pistas en sus fincas ponen en grave riesgo su seguridad personal, y quienes lo ha hecho son asesinados por los traficantes de drogas. Pero también son señalados por las autoridades nacionales de ser supuestamente cómplices del establecimiento de pistas clandestinas en sus unidades de producción. Incluso se exige un permiso de las autoridades para mover la maquinaria pesada, que es tan necesaria en las actividades diarias en las unidades de producción, bajo la presunción de que pueden ser usadas para establecer pistas. Según este testimonio, para obtener el permiso se exigía a cada productor 6.000 dólares y su trámite era muy lento. Los productores tuvieron la iniciativa de exponer la situación ante el ministerio correspondiente, a través de las asociaciones, y lograron solamente bajar el costo de este trámite y recortar los lapsos de entrega del permiso.

Otra fuente señaló que en Machiques se han reportado casos de ganaderos que supuestamente reciben pagos no acordados de parte de los carteles, que dejan grandes cantidades de dinero- se habla de hasta 25 mil dólares- a las puertas de sus residencias después que instalan pistas ilegales en sus terrenos, sin dejar margen de acción a los productores cercados por el control de los criminales. También explicó que para el aterrizaje de las aeronaves los carteles se apropian de zonas cercanas a los muros o

“pretilles” que son construidos en línea recta en las fincas para que no pase el agua en las cercanías del Lago de Maracaibo. “Nadie se puede oponer a sus resoluciones”, agregó.



Distorsiones económicas

Supervivencia al ras del delito. Zulia fue el centro petrolero del occidente de Venezuela por excelencia y ahora es un reflejo de la crisis humanitaria compleja: sectores con economía en ruinas, bajo poder adquisitivo, grave deficiencia en los servicios de agua potable y electricidad, un entorno impunidad frente a la criminalidad desbordada y falta de protección Estatal.

La economía ilícita más grande con mayor alcance e impacto es el narcotráfico y las diferentes actividades que genera y requiere. Una parte de la población se dedica a la raspa de coca cuando se inician las jornadas de recolección de la planta, principalmente en territorio colombiano. Consiste en trabajar la hoja directamente sin guantes, lo que produce un hongo en las manos que permite identificar fácilmente a quienes se dedican a esta actividad porque son expuestos a varios químicos “y muchos se han muerto”, comentó una fuente.

En la *raspa de coca* el pago puede llegar a 20 dólares por kilo de hojas de coca recogida, muy superior a los 10 dólares de sueldo mensual que pueden ganar en las fincas. En municipio Semprún 70% de la mano de obra es de la raspa de coca, según estiman algunas fuentes. Representantes de dos organizaciones de la

84 Organizaciones de la sociedad civil estiman que solo un 0,10 % de la población percibe mensualmente más de 250 dólares, mientras que más de la mitad, 58,6% tiene un ingreso mensual entre 51 y 150 dólares. Disponible en: Codhez. En el 2022 la inseguridad alimentaria persiste en el Zulia: familias con ingresos insuficientes y dependencia a las remesas. <https://codhez.org/en-el-2022-la-inseguridad-alimentaria-persiste-en-el-zulia-familias-con-ingresos-insuficientes-y-dependencia-a-las-remesas/#:~:text=Para%20Codhez%2C%20en%202022%20los,de%20preocupaci%C3%B3n%20entre%20los%20zulianos..> 28/11/2022

Un activista de una organización internacional señala que desde la pandemia por el COVID y a raíz de las fuertes lluvias entre septiembre y diciembre de 2022 los alcaldes- en especial en La Guajira y en Mara- tuvieron más apertura con la entrega de alimentos como parte de la ayuda humanitaria, porque recrudesció la falta de alimentos. Pero aseguró que en 2023 persisten las restricciones para llevar comida a los más desprotegidos en Maracaibo, por los controles de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), Región de Estratégica de Defensa Integra (REDI) y algunos despachos como el Ministerio de Atención de las Aguas.



sociedad civil señalaron que también en el municipio Mara se han identificado casos de personas que se dedican a la raspa coca en Colombia.

El narcotráfico ha generado nuevas ganancias en el sector de la pesca con el negocio de *el buche*. Los pescadores del estado Zulia “están amarrados” a esta actividad. El llamado buche, o vejiga natatoria del pescado, es un subproducto hasta hace poco escasamente aprovechado en el mercado venezolano, de gran poder nutritivo y muy apreciado en Asia. Pero desde hace un tiempo, el narcotráfico compra a los pescadores *el buche*- sobre todo de la Curvina, que es más grande- para transportar la droga.

Según se conoció el buche de pescado es impermeable y evita que los olores lo atraviesen. Los perros antidrogas no pueden percibirlo. Los pescadores que están en el Lago de Maracaibo y en la costa del mar Caribe que limita con el estado son obligados a vender el pescado a las mafias “o los matan”.

Según se conoció el buche de pescado es impermeable y evita que los olores lo atraviesen. Los perros antidrogas no pueden percibirlo. Los pescadores que están en el Lago de Maracaibo y en la costa del mar Caribe que limita con el estado son obligados a vender el pescado a las mafias “o los matan”.

También persiste la venta a granel de gasolina en las aceras, a la vista de todos, y en algunos casos muy cerca de las estaciones de servicio cerradas, una actividad en la que participan hombres, mujeres, niños; entre ellos indígenas, especialmente de la etnia Yukpa. El combustible lo venden en recipientes pequeños de plástico, a un dólar o un dólar y medio el litro. Uno de los consultados señaló que la Guardia Nacional les entrega a los Yukpas el combustible especialmente en una estación de servicio ubicada en el km 19. En el recorrido por la frontera con Colombia y otras zonas como la

capital, o en el municipio Semprún, se pueden observar a integrantes de esta etnia vendiendo combustible, el precio se incrementa a medida que se avanza hacia la frontera con Colombia.

El negocio de la chatarra es una actividad legal pero que pasa los límites de lo ilegal. Las empresas tienen permisos del gobierno nacional, a través del Ministerio para Ecosocialismo y Aguas, pero adquieren material sustraído de empresas estatales desvalijadas. Es un negocio que sigue vigente en 2023 y que reporta elevadas ganancias para quienes se dedican a esta actividad. Un funcionario de alto nivel regional aseguró que hay “cementorios de hierro” producto del saqueo a la industria del Estado. Aseguró que muchas personas participan ante el silencio generalizado.

Muchas familias se dedican a la venta de chatarra a menor escala, llevando material a estas empresas, pero son el eslabón más débil, porque son objeto de extorsión por parte de funcionarios policiales. “Si el policía te agarra con la chirrichera donde llevas la chatarra, te quiere matraquear”, apuntó uno de los consultados.

Se identificaron otras actividades que representan un porcentaje menor de la economía ilícita y con poco impacto a nivel nacional, pero que tienen una importante dimensión para los pobladores involucrados. Entre ellas el tráfico de armas proveniente de Orope (Colombia), que llegan a Venezuela a través de los municipios Catatumbo y Semprún para venderlas a los grupos criminales activos en Venezuela; la explotación de carbón al sur de la Guajira, en tierras indígenas protegidas; la sustracción de minerales no preciosos como granzón y arena que denominan “el saque”. Otra actividad es el transporte de productos desde Colombia a Venezuela que no cumplen con los renglones previstos en la ley por parte de grupos que algunos llaman “los binacionales” para diferenciarlos de los

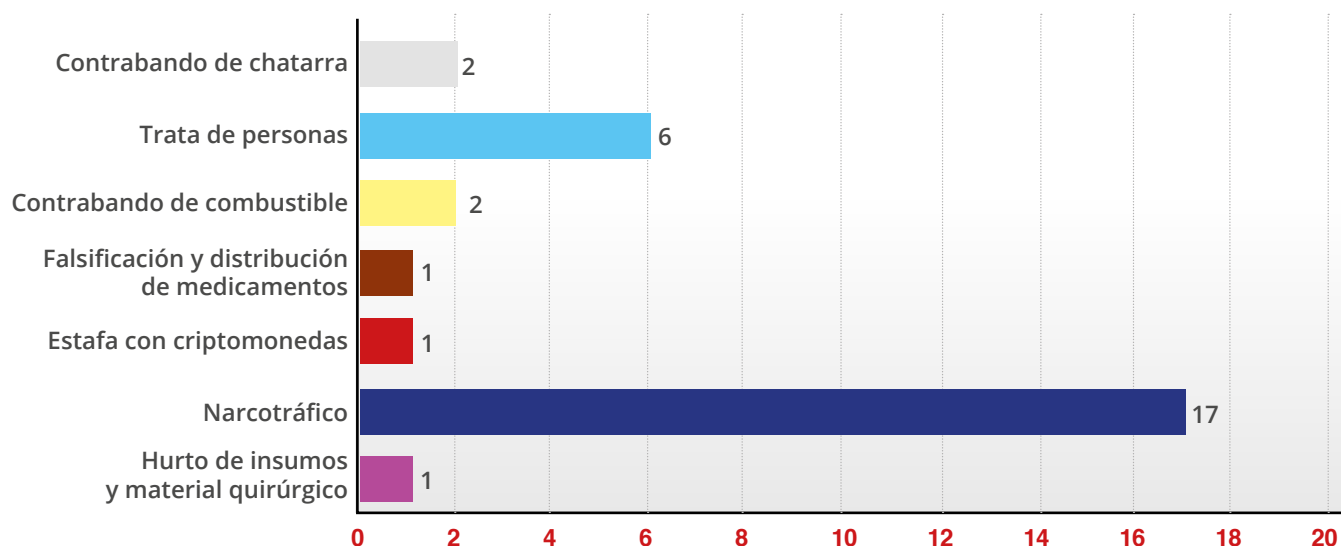


comerciantes locales; también la pesca de camarón y cangrejera en la que estarían involucradas las mafias.

De acuerdo a la base de datos elaborada para esta investigación, las economías ilícitas que más se reseñan en las páginas de noticias referentes al estado Zulia son: el narcotráfico y la trata de personas, en menor medida la extorsión violenta, el contrabando de

combustible y el contrabando de chatarra. También se registraron noticias sobre falsificación y distribución de medicamentos, hurto de insumos y material quirúrgico; extorsión en pasos fronterizos; y estafa con cripto-monedas. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la información recabada.

CANTIDAD DE ILÍCITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO ZULIA SEGÚN NOTICIAS Y REPORTE



Comercios bajo terror. La extorsión violenta en Zulia es ejercida por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), como los denominan las autoridades militares y de seguridad. Las fuentes señalan que ha habido cambios en la dinámica de estos grupos. En Zulia cada banda cobraba “vacuna” en su territorio para prestar “seguridad” a los establecimientos comerciales, incluso centros de salud.⁸⁵

Según un activista de derechos humanos consultado, en tiempos recientes afloró el cobro de varias bandas a un mismo

comerciante simultáneamente, lo que ha incidido en el desplazamiento de quienes no pueden pagar. Hubo un repunte y en marzo de 2023 un supermercado fue atacado. El cabecilla era el comandante de los bomberos.⁸⁶

Estas bandas son lideradas por sujetos que coinciden en colocarse el mote de “masacre”, que se dedican a la extorsión violenta. Se precisa de las entrevistas que los cabecillas son venezolanos, que incluso han emigrado a Colombia, Chile y Estados Unidos.

85 Según nuestra base de datos entre enero y septiembre de 2022 ocurrieron 13 atentados con granadas a los locales, incluso fue detenido un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) por pertenecer a uno de estos grupos.

86 Tres detenidos por ataque a comercio en Maracaibo: un funcionario de los bomberos aeronáuticos presuntamente involucrado <https://runrun.es/noticias/495781/tres-detenido-por-ataque-a-comercio-en-maracaibo-un-funcionario-de-los-bomberos-aeronauticos-presuntamente-involucrado/>



Los grupos delictivos lanzan granadas o disparan contra comercios o residencias de aquellos que no pagan la vacuna. “Aquí hay dos granadas semanalmente en las casas”, aseguró alguien que reside en el municipio Jesús María Semprún. “Son lanzadas en las residencias de las personas. No importa quién este, si hay niños”.

Las fuentes aseguran que desapareció “La Zona”, que era un grupo delictivo con poder de fuego y que parte de sus integrantes se habrían sumado al ELN. También mencionó que la megabanda delictiva El Tren de Aragua, que ha tenido presencia en Guajira, ha sido repelida por los organismos de seguridad en emboscadas. Los grupos delictivos más activos son “Los Mirandas” y “Los Leal”. Un funcionario municipal de alto nivel dijo que algunos grupos se dedican, además, al microtráfico especialmente en el centro de Maracaibo donde vende una droga que denominada “La Chapa”, que es la más barata, y la droga más cara llamada La Rosada”.⁸⁷

De acuerdo a los periodistas consultados, en La Cañada de Urdaneta hay cuatro bandas criminales que cobran vacuna hasta a la misma alcaldesa del municipio. Entre las bandas activas para el período en estudio están la del “El Yiyi”, identificado como Guillermo Boscán Bracho⁸⁸ quien estaría en New York, Estados Unidos. Otro de los cabecillas es José Leonardo Atencio Coronado (30 años) conocido como

“J. L. La Burra”. También fue mencionado Mauricio José Luzardo Rondón⁸⁹, de 30 años, quien es el líder de la banda delictiva “el Mauricio” que estaría vinculada al asesinato del concejal de La Cañada de Urdaneta, Ronald Soto, ocurrido el 10 de agosto de 2022.⁹⁰ Opera principalmente en los municipios La Cañada de Urdaneta⁹¹ y San Francisco. Se presume que está en Colombia.

Otros dos sujetos fueron mencionados como activos. Se trata de “Yeiko Masacre”, identificado como Erick Alberto Parra Mendoza⁹², cuyo grupo delictivo domina la costa oriental del lago, y “El Caracas”, José Antonio Márquez Morales, de 28 años, quien se formó en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y se graduó en la primera promoción de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).⁹³ Sus hombres están en municipio Jesús Enrique Lossada. Se presume que “El Caracas” está en Perú.

La lista la completan “El Chocolate”⁹⁴, quien estaría en Colombia⁹⁵ y el “Wilmito”, identificado como Wilmer Antonio Matos Atencio. Además, es mencionada la banda criminal “Los Manetos”, que opera en el municipio Almirante Padilla. Otros entrevistados agregaron a “El Cagón”, que ahora después de alcanzar más edad se hace llamar “El Patrón; “Edgarcito” y “Andrecito”, este último perpetra sus fechorías en varias parroquias del municipio Baralt.

87 Semana. “Tusibi”: así se usa en Medellín la cocaína rosada, veneno que se vende en \$ 6 millones los 15 gramos, <https://www.semana.com/mundo/articulo/tusibi-asi-se-usa-en-medellin-la-cocaina-rosada-que-se-vende-en-6-millones-los-15-gramos/202210/10/05/2022>.

88 Primera Edición. Noticias de la Costa Oriental del Lago. Disponible en <https://primeraedicioncol.com/tag/el-yiyi-2/>
El Yiyi era un sicario del grupo criminal de José Luis Leal. Él y otros integrantes de la banda se separaron y organizaron sus propios grupos delincuenciales dedicados al sicariato, secuestro, homicidio y extorsión. Disponible en El Pitazo. <https://elpitazo.net/sucesos/quienes-son-el-yiyi-y-el-caracas-los-responsables-de-los-ataques-en-maracaibo/>

89 El Regional del Zulia. Cayeron presos tres extorsionadores de “Mauricio Luzardo” <https://diarioelregionaldelzulia.com/cayeron-presos-tres-extorsionadores-de-mauricio-luzardo/> 18/10/2022

90 El Pitazo. Zulia | «El Mauricio»: líder de banda vinculada al asesinato de concejal en La Cañada. <https://elpitazo.net/sucesos/zulia-canada-de-urdaneta-el-mauricio-lider-banda-asesinato-de-concejal/> 19 de agosto de 2022.

91 Ídem. El Observatorio Venezolano de Violencia, capítulo Zulia, precisó que La Cañada de Urdaneta está en la lista de los municipios más peligrosos. Con solo el 2,1% de la población del estado Zulia, registró el 11% de las muertes violentas en la región en el primer semestre de 2021. La tasa es de 239 por cada 100.000 habitantes.

92 Transparencia Venezuela. Economías Ilícitas. Grupo armado Yeico Masacre, <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/grupo-armado-yeico-masacre/>

93 En abril de 2022, el Cicpc informó sobre la detención de dos de sus funcionarios por cooperar con la banda. Disponible en El Pitazo. <https://elpitazo.net/sucesos/quienes-son-el-yiyi-y-el-caracas-los-responsables-de-los-ataques-en-maracaibo/>

94 Primera Edición. Eran del Gedo “el Chocolate”: 5 delincuentes abatidos en enfrentamiento con comisión mixta en la vía a Perijá <https://primeraedicioncol.com/eran-del-gedo-el-chocolate-5-delincuentes-abatidos-en-enfrentamiento-con-comision-mixta-en-la-via-a-perija/>

95 Zulia: alias “Chocolate” es condenado a 28 años de cárcel por secuestro y asesinato de una mujer <https://primeraedicioncol.com/zulia-alias-chocolate-es-condenado-a-28-anos-de-carcel-por-secuestro-y-asesinato-de-una-mujer/#:~:text=Ante%20la%20contundencia%20de%20las,Perij%C3%A1%20en%20el%20estado%20Zulia>.



Se hizo referencia a que en el municipio La Cañada de Urdaneta la llamada mafia cobra a la gente por casi cualquier cosa, incluso a quienes tienen negocios humildes como venta de guarapo. “Tú vas a pintar una casa en La Cañada y tú tienes que pagar”, señaló uno de los consultados, que destacó que el cobro lo hacen los delincuentes organizados, no la guerrilla.

La moneda venezolana, el bolívar, fue desplazado por el peso colombiano. “El bolívar no existe, prefieren el peso”. El personal de las fincas cobra en pesos colombianos, pero en una ciudad como Maracaibo se paga con dólares en efectivo.



Distorsiones políticas

Las autoridades locales electas versus el orden militar y guerrillero. Varios entrevistados coincidieron en que los alcaldes están a merced de lo que disponga la guerrilla. También deben cumplir las órdenes los altos mandos militares, que sustituyeron la figura del “protector”, un funcionario que en otras ocasiones ha sido designado por el gobierno central, cuando un opositor logra ganar las elecciones en un determinado estado del país.⁹⁶

Una de las fuentes sostuvo que los militares, que tienen el control sobre la seguridad y el combustible, también tendrían mucho que ver con la ejecución de políticas públicas o actividades locales. “Lo que se va a hacer en los municipios tiene que ser conversado con ellos”.

Se señaló que esta convivencia algunas veces rayaría en la complicidad. Así sí se habló abiertamente, porque es un caso público,

de la alcaldesa oficialista del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández⁹⁷, detenida por narcotráfico, en enero de 2022 cuando transportaba 7 kilos de drogas en su vehículo. No hubo proceso electoral para sustituirla. “No llamaron a elecciones, el que perdió lo llamaron y lo pusieron de alcalde”, acotó una de las fuentes.



Keyrineth Fernández

Algunos entrevistados perciben que los alcaldes no ejercen su autoridad muchas veces por miedo: “El alcalde se hace el *Willie Mays*. Trata de pasar desapercibido”.⁹⁸

También se señaló que en época de elecciones las actividades de campaña electoral deben ser autorizadas por los militares y en especial por la guerrilla. En sectores como El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún, se reporta que hay que pedir permiso a la guerrilla para colocar propaganda electoral. Uno de los consultados señaló que en ese sector “se elige a la autoridad que la guerrilla quiera que se elija”. La percepción de este entrevistado es que esa tendencia se extiende a otros municipios como Machiques

⁹⁶ Hugo Chávez aplicó en 2008 por primera vez la figura de “protectores”, que era una figura con poder político, disponibilidad de recursos y acceso directo al poder central, por encima de los dirigentes electos por el voto popular.

⁹⁷ Fue alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, desde 2017 y reelecta el 21 de noviembre de 2022. El 31 de julio de 2017 fue electa diputada de la hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fue diputada por circuito lista a la Asamblea Nacional (AN) 2015 en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Disponible en Poderopedia. <https://poderopediave.org/persona/keyrineth-fernandez/>

⁹⁸ Se omite el nombre por seguridad.



Las mafias también dominan el territorio como en Los Puertos de Altagracia donde son los delincuentes los que controlan la entrada a esa zona pesquera. Se dijo que en Lossada hay que avisar a la mafia para entrar al caserío Marimonda que sería controlado por la banda de “El Guaro”.

Una de las fuentes señaló que en una oportunidad se coordinó con un grupo irregular la presencia de un alcalde en un sector, para fue necesario indicar hasta las características del vehículo en el que viajaba el funcionario electo. “Uno tiene que tener una contraseña, decir qué carro venía”, contó uno de los consultados.



Distorsiones sociales

Adaptarse al entorno criminal. Las actividades de los grupos criminales han hecho que los habitantes de varias poblaciones zulianas migren internamente, de un municipio a otro, o hacia otras naciones. Una fuente del gobierno regional calcula que al menos 700 mil zulianos abandonaron el estado y el país en los últimos años. Los que no se adaptan, se van, como el caso de una familia de 18 integrantes que debido a la migración forzada tomaron camino por la selva del Darién, donde fueron atacados a tiros y resultó muerto un niño de 6 años.⁹⁹



Hay “pueblos fantasmas”, o tomados por carteles mexicanos, zonas inaccesibles y sitios a los que solo se puede llegar con “un baquiano” o solicitando permiso a la guerrilla, a las mafias y a los militares. El municipio Santa Rita, ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, por ejemplo, es considerado un pueblo fantasma. A simple vista, en recorrido por el municipio Jesús María Semprún, se observan viviendas lujosas, abandonadas, consumidas por matorrales. Un periodista comentó que en las zonas más peligrosas “las casas se venden en 400 o 500 dólares”.

Los residentes de los municipios zulianos en los que el negocio de la droga está en auge acatan los horarios impuestos por los irregulares colombianos. En Jesús María Semprún las actividades terminan al mediodía o a más tardar a las 4 de la tarde. Enfrentarse a la guerrilla no es una opción para quienes habitan este municipio. Los productores también han tratado de organizarse para el día a día, por lo que conformaron “un grupo de seguridad”, mientras otros se encargan de otras labores como, por ejemplo, garantizar el combustible.

Hay una sensación de seguridad con los irregulares. La llamada Troncal 6¹⁰⁰ era una vía insegura y en la actualidad es controlada la guerrilla. “Por lo menos dejaron de robar tantos carros”, acota la fuente. Después de las 6 de la tarde no se puede transitar por esa importante vía, porque los guerrilleros se comienzan a desplegar por la zona y controlan el paso. Los irregulares son percibidos como una suerte de protectores y no cobran vacuna a los pobladores.

Se reporta el establecimiento de “bases” de la guerrilla en algunas fincas, obtenidas de la negociación a veces forzadas con los productores. “Hay dueños de fincas que son de las FARC” en Catatumbo y Tarra.

99 Tal cual: Panamá rescató a familia zuliana asaltada en la selva del Darién. [https://talcualdigital.com/denuncian-secuestro-de-una-familia-entera-en-selva-del-darien/#:~:text=Una%20familia%20zuliana%20de%2018,\(Senafront\)%20de%20ese%20pa%C3%ADs.](https://talcualdigital.com/denuncian-secuestro-de-una-familia-entera-en-selva-del-darien/#:~:text=Una%20familia%20zuliana%20de%2018,(Senafront)%20de%20ese%20pa%C3%ADs.) 21/09/2022.

100 Troncal 6: Parte desde Castilletes, pasa por Maracaibo y culmina en los límites con el estado Táchira. Es conocida como La carretera Machiques-Colon o Transversal del Caribe y tiene una longitud de 588Km.



Un activista de derechos humanos sostiene que sí hay plantaciones y procesamiento de drogas en Venezuela. “Todo el mundo sabe que se produce drogas al sur del lago”. Refiere que hay fincas en las que trabajan familias enteras, sean indígenas o no, incluyendo a los niños. Relató que el tema con los menores en edad escolar es tal, que las maestras en el municipio Colón se vieron obligadas en una oportunidad a llegar a un acuerdo con los que manejan las fincas- no está claro si “disidentes de la Farc o integrantes del ELN”- para dejar libres a los niños en la mañana y que “trabajen” en las tardes.

Otras formas de ganarse la vida. Se conoció de primera mano el caso de una maestra de un colegio en Semprún, que había sido reemplazada en su puesto de directora del centro educativo por alguien de un consejo comunal, que buscó apoyo de las autoridades regionales para obtener el nombramiento formal. La educadora tenía un especial interés aunque tenía que hacer dos viajes diarios- ida y vuelta- de casi cuatro horas por carretera desde el municipio San Francisco, donde vivía, hasta Semprún. La fuente indicó que la maestra admitió que “los carteles pagaban 250 dólares a los profesores por mantener la escuela” y a los obreros 150 más una bolsa de comida. La mujer quería seguir trabajando para los narcotraficantes.



Uno de los entrevistados insistió como la miseria empuja a muchos al entorno criminal. Por ejemplo, un *gatillero* que lanza una granada cobraría hasta 100 dólares por hacerlo. “Eso significa que cualquier muchacho de un barrio, que necesita una medicina para su mamá, tiene que tirar la granada. Es natural”, dijo un funcionario local.

Hay pocas opciones para los jóvenes. En la escuela de policía regional, por ejemplo, hay pocos candidatos porque este oficio no ofrece el suficiente ingreso para vivir. Algunas alcaldías deciden colocar un comedor para tratar de mantener a los jóvenes interesados en ser policías y también un transporte por lo complicado que es trasladarse en un estado que padece serios problemas de combustible. En una de las alcabalas por las cuales transitó el equipo investigador de nuestra organización, un policía pidió una colaboración de “aunque sea un dólar” para “hacer una sopa en el comando”. Un funcionario se lamentó porque los jóvenes no están interesados en estudiar, en medio de la crisis que también afecta el sector educativo en toda Venezuela. Afirmó que muchos quieren ser *Titoker, prepago, dealer, micro dealer*.

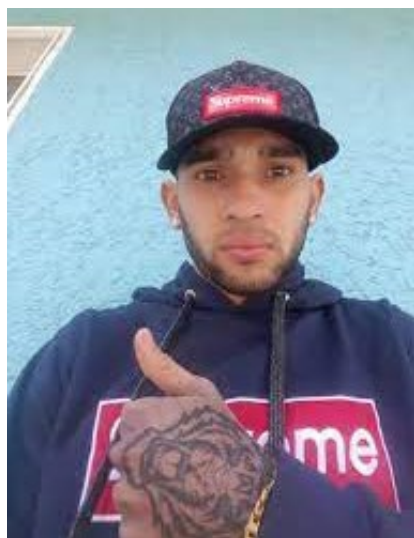
Los periodistas consultados sostienen que la población también siente apego a estos grupos criminales porque hacen algo por la comunidad. “En los Puertos de Altigracia la mafia metió una tubería de gas”. También refieren que los pobladores de esas zonas dirigen cartas a los cabecillas de las bandas para pedir ayudas sociales. Uno de los activistas de derechos humanos consultados aseguró que en la parroquia Manuel Dagnino, en la capital zuliana, se instaló una recicladora de chatarra y “dan comida a la comunidad”. “Alquilan una casa y la gente se acerca y se reparten bolsas de comida”. Afirmó que se hace “de manera clandestina”, pero la casa “está custodiada por la policía municipal”.



Otra situación que preocupa a activistas de derechos humanos es el trabajo infantil, de niños que están en mendicidad. Indicaron que hay niños recogiendo chatarra en el sector denominado La Pomona, y que muchos son explotados en trabajos en las calles, principalmente por las bandas, pero señaló que no hay casos plenamente identificados.

El miedo a estos grupos delictivos, la falta de protección estatal y la pobreza, impiden la denuncia. Esto aunado al abuso sexual en sus propias familias, la explotación por parte de sus cuidadores y la violación de sus elementales derechos, como la identidad. Su organización contabiliza al menos cinco personas por familia y ante la situación de pobreza extrema “el trabajo infantil es visto como necesario”, incluso en algunos sembradíos de drogas junto a algunos familiares.

En meses recientes las redes sociales son usadas para amedrentar a la población, con videos sobre los castigos de la guerrilla contra quienes se enfrentan a sus intereses. Es un método de amedrentamiento también utilizado por las mafias que extorsionan, a través de cuentas de Instagram: Para amenazar de muerte los criminales dicen la frase: “hoy te va a caer el carro”.



El Yeico (Masacre)

La percepción de las fuentes entrevistadas es que la mayoría, en especial los jóvenes, asumen estos hechos como normales. “Muchos quieren llegar a ser como El Yeico (Masacre)

Llegar a ser el que manda a cortar las cabezas”, dijo uno de los consultados.

El impacto del crimen en las etnias. Los Yukpas son una etnia indígena que habita en la Sierra de Perijá, entre Venezuela (municipio Rosario de Perijá) y Colombia. Sufre como otros pueblos indígenas los rigores de la miseria, enfermedades como leishmaniasis, paludismo y tuberculosis, así como la desasistencia del Estado. Una fuente señaló que los guerrilleros utilizan a los Yukpas en sembradíos y a otros “los desaparecen”.

Un entrevistado, justamente perteneciente a una etnia, dijo que, hay cinco pueblos indígenas en el estado Zulia, entre los cuales los Yukpas son los más vulnerables. Además, han sido desplazados por el narcotráfico de su territorio, especialmente en las partes altas de la sierra. Aseguró que la guerrilla capta a los líderes indígenas “para tener más radio de acción” y agregó que “en los pueblos indígenas hay consumo de drogas y también se usa a esa población para vender la droga”.

Los indígenas también migran a otros países, en medio de la grave situación, en mula o a pie. La fuente calcula que 40 % de los pueblos se han desplazado y afirma que los Yukpas no salen de Venezuela, solo se trasladan de un municipio a otro. Dijo que estos indígenas respetan a los grupos irregulares colombianos y algunos participan en el robo de ganado. La guerrilla también es la encargada de autorizar cualquier actividad con los Yukpas.

Un poblador de Semprún que señaló que los Yukpas truncan las vías, como la troncal 6, para impedir el paso a Maracaibo. Para el momento de la visita de campo, no hubo ningún cierre de vías por parte de esta etnia. Otro de los entrevistados dijo que los Yukpas son por lo general agresivos cuando truncan las vías y



piden 10 dólares para permitir el paso. Se afirma que le Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no interviene. También ha hecho protestas en sedes policiales.¹⁰¹

Uno de los periodistas entrevistados asegura que hasta la resolución de conflictos pasa por el visto bueno de irregulares colombianos, el ELN. En la Guajira y Semprún existe “el palabrero” en la etnia Wayuu, que es una especie de negociador que aplica justicia de paz, una figura que también se ha visto influenciada por la presencia de irregulares.



Distorsiones culturales

Los integrantes del llamado Cartel de Sinaloa, los mexicanos, no se ocultan. “Los fines de semana los del Cartel Sinaloa cerraban las calles y se ponían a beber”. Incluso, coinciden todos los entrevistados en que hay un pueblo llamado San Felipe que muchos ya conocen con el nombre de Sinaloa, ubicado en la parroquia Bartolomé de las Casas, en Perijá. Se señaló que ahí se habla con acento mexicano y que muchos de sus habitantes tienen costumbres de ese país.

Uno de los entrevistado señaló que en el municipio Catatumbo hay una población que se llama El Guayabo, que se parece a Colombia, a 10- 15 minutos de ese país, donde están los paracos y la guerrilla.

También se señaló que disidentes de las FARC se establecen con sus familiares en pequeños poblados, donde sus viviendas destacan en medio del entorno de miseria, porque son “más caras que el mismo pueblo”.

Las condiciones de miseria acentúan el reclutamiento de jóvenes por parte de la guerrilla. Se menciona una población en la Villa del Rosario que se conoce como “Barranquita”, a orillas del Lago de Maracaibo, en la que esto ocurre a la luz del día. “Y allí la guerrilla llega a la plaza, a hablar con los que se van a llevar de 10, 12, 14 años”, apuntó uno de los consultados.

Hay una problemática que subyace es la afectación en el derecho a la identidad de los menores de edad. Incluso para sacar una partida de nacimiento se refiere que cobran 3 dólares por el trámite, una cantidad que para muchas familias es difícil de cancelar.



DISTORSIONES EN EL ESTADO ZULIA

TIPO	DISTORSIONES REGISTRADAS
 <p>INSTITUCIONALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades del gobierno regional y municipal con poco margen de acción en materia de seguridad, debido a limitaciones en sus capacidades y competencias. • Algunos municipios no tienen policías y los organismos policiales municipales que existen son de carácter administrativo. La seguridad está en manos de los militares. • Temor a la denuncia y desconfianza de la población en el sistema judicial y los organismos de seguridad. • Violación de derechos elementales como la identidad • Percepción de que hay un orden especial ejercido por algunos militares, conjuntamente con grupos organizados del crimen. • Algunos funcionarios de seguridad, dependientes del gobierno nacional estaría al servicio de los ilícitos. • Algunos alcaldes están sometidos a las órdenes de militares y grupos delictivos. Otros mandatarios locales son señalados de estar presuntamente aliados al crimen.
 <p>ECONÓMICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El bolívar ha sido desplazado por el peso y el dólar como moneda. • Sector comercial está sometido a extorsión violenta. • Hay empleos relacionados con actividades ilícitas: venta de combustible a granel, recolección ilegal de chatarra, <i>raspa de coca</i> y la venta de el <i>buche</i> de curvina a los narcotraficantes usado para transportar la droga.
 <p>POLÍTICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades electas sometidas al orden impuesto por grupos criminales y por militares (captura de una alcaldesa del partido de gobierno por narcotráfico, como hito importante del impacto de la criminalidad en la zona). • El control territorial de los grupos criminales condiciona las actividades de campañas electorales y actividades de gestión de los funcionarios electos.
 <p>SOCIALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Control del territorio por parte de irregulares en las localidades donde actúan, con imposición de horarios y límites al libre tránsito. • Desplazamiento interno y hacia otros países. Pueblos fantasmas. • Jóvenes captados por irregulares colombianos, carteles del narcotráfico y bandas delictivas. • Percepción de que los grupos irregulares ofrecen seguridad. • Impacto negativo en las etnias, provocando su desplazamiento, su participación en oficios derivados de actividades ilícitas y sometimiento cotidiano al orden criminal.
 <p>CULTURALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Además de colombianización, con el establecimiento de irregulares colombianos con sus familias en localidades apartadas, se percibe la influencia de la cultura mexicana, por presencia del Cartel de Sinaloa en territorio zuliano. • La falta de oportunidades empuja a los jóvenes a ingresar en grupos criminales o a la guerrilla. Se percibe que es una aspiración juvenil participar o controlar alguna actividad ilícita.



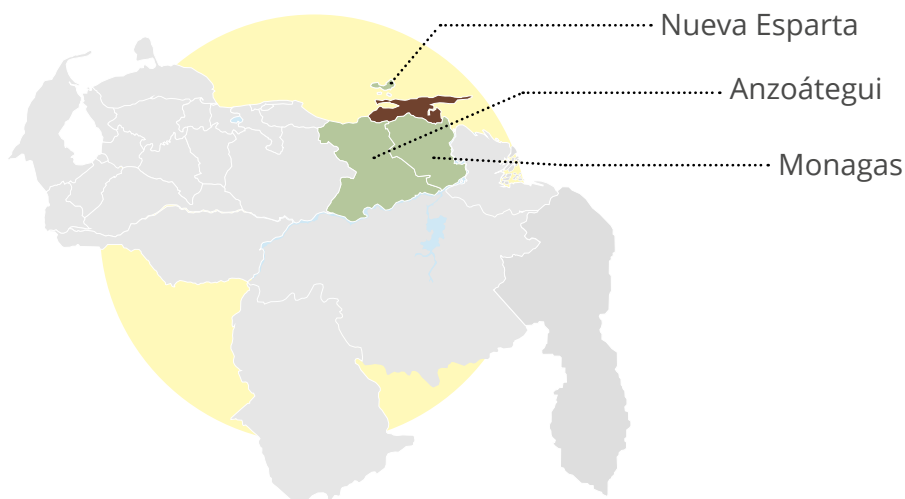
SUCRE

Entre el auge de la trata y los territorios entregados al narcotráfico



El estado Sucre está ubicado al nororiente de Venezuela, tiene una superficie de 11.800 Km², equivalentes al 1,28 del territorio nacional y cuenta con una población de alrededor de 900.000 habitantes, según las últimas estimaciones. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con los estados Monagas y Anzoátegui, al este con el golfo de Paria y al oeste con el golfo de Cariaco.

Es conocido a nivel nacional por ser el primer lugar al que llegaron los colonizadores españoles a finales del siglo XV, así como por su gran potencial turístico dadas sus majestuosas playas y hermosos atardeceres. No obstante, en las últimas décadas, la entidad costera ha pasado a ser referencia por sus altos niveles de criminalidad, principalmente por la actuación de grupos organizados dedicado al tráfico de estupefacientes.



Las investigaciones realizadas en los últimos años han permitido identificar los distintos tipos de economías ilícitas y grupos criminales con operaciones en el estado Sucre, zonas en las que se encuentran y rutas que suelen usar para sus actividades. Sin embargo, la crisis económica y social persistente en Venezuela, los cambios de dirigentes políticos regionales y autoridades militares, además del trabajo de organizaciones humanitarias, han traído consigo cambios en las dinámicas.

La sistematización de noticias y reportes provenientes de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2023 refieren que los municipios con mayor incidencia de economías ilícitas son Valdéz (Güiria), Bermúdez (Carúpano), Sucre (Isla Los Caracas Este- Parque Nacional Mochima), Arismendi (Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, San Juan de Unare) y Mariño (Península de Paria, Irapa), Andrés Eloy Blanco (Troncal 10) y Ribero.



Representantes de distintos sectores de la sociedad civil en Cumaná y Carúpano, entrevistados para este informe coinciden en identificar estos municipios como los de mayor presencia de las economías ilícitas en la entidad. Dirigentes de gremios comerciales, activistas de derechos humanos, directores de varias organizaciones de la sociedad civil, integrantes de diferentes grupos poblacionales y periodistas que cubren la actualidad del estado, así como trabajadores de entes públicos sostienen que pese a operativos militares anunciados por cuerpos de seguridad y defensa, el alza de los ilícitos persiste.

Aunque existe gran temor para declarar, incluso sin necesidad de identificarse, las fuentes sostienen que en el estado hay presencia de bandas criminales conocidas nacionalmente como el Tren del Llano y Tren de Aragua, así como guerrillas extranjeras y bandas locales.



Distorsiones institucionales

El narcotráfico a todas luces y campante.

Güiria es un pueblo de secreto a voces, en eso coinciden habitantes del estado Sucre. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico tienen tanto tiempo apoderadas de esta localidad que para los lugareños no se trata de nada desconocido. El tema se admite abiertamente, aunque hay mucha prudencia cuando de mencionar a los agentes involucrados se trata.

Según las fuentes consultadas, las bandas criminales que se consolidaron en la zona actúan a sus anchas ante la inacción y complicidad de las autoridades y organismos de seguridad dependientes del gobierno central. Imponen sus reglas de convivencia y causan un grave impacto en las condiciones de vida de los habitantes.

El narcotráfico se ha vuelto un tema tan conocido entre los pobladores que muchos han llegado a normalizarlo. “En el último año los

militares han anunciado diferentes operativos contra esas organizaciones criminales, pero cuesta mucho creer en la efectividad de esas operaciones porque se han registrado demasiadas denuncias de complicidad entre ellos. Dicen que detuvieron a ciertos grupos, pero al final nada cambia”, afirmó una de las personas entrevistadas en la entidad.

Entre 2022 y el primer semestre de 2023, el jefe del Comando Estratégico Operacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, ha publicado a través de sus redes sociales diferentes operaciones realizadas en el eje costero del estado Sucre contra “el tráfico de drogas, trata de personas, cobro de vacunas, abigeato o cualquier actividad al margen de la ley”.

Aunque el general publica constantemente informaciones sobre el decomiso de drogas y la incautación de materiales usados por los narcotraficantes, la información es aportada sin mayores detalles. No se conoce la ubicación geográfica de las operaciones, la identidad de las personas detenidas, los grupos a los que presuntamente pertenecen y el tamaño de sus actividades.

Las fuentes coinciden en que el hermetismo de parte de las autoridades no es aislado. Refieren que este tipo de acciones con frecuencia va orientada a algunas organizaciones criminales que no son aliadas o que deben ser apartadas para lugar a otros actores que se encarguen del tráfico de drogas y otros delitos.

En la entidad también hay reportes de actuación de bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión de comerciantes, robos y secuestros. Una de las bandas más conocidas era liderada por un hombre conocido como alias El Cury, quien fue asesinado a inicios de 2022. No obstante, la banda ha seguido activa en la troncal 9, que atraviesa el estado Sucre hasta llegar a Güiria. En esa zona es donde también tendría presencia el Tren de Aragua.



Trata: miedo y silencio. Solo en 2022 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de las comunidades reportaron que habían atendido más de 40 casos de trata de personas en el estado Sucre. Las principales víctimas son las mujeres porque son llevadas a Trinidad y Tobago con el fin de explotarlas sexualmente.

Muchos de los casos de trata se han confirmado después de que Trinidad y Tobago deporta a los nacionales. Los venezolanos que son “retornados” llegan al puerto de Güiria y son recibidos por la guardia costera nacional. Solo cuando los efectivos militares lo autorizan, las mujeres y niñas que no tienen a donde acudir son atendidas en una casa instalada por Cáritas en Güiria en la que se les brinda alimentación y se les ayuda con el transporte para sus lugares de origen.

Hay consenso en que las cifras de trata de personas son superiores, pero las víctimas se niegan a denunciar por varios motivos: temor a represalias por parte de los tratantes, quienes muchas veces regresan en las mismas embarcaciones que ellas; desconfianza en el sistema de justicia, ante la ausencia de castigo para señalados por estos delitos; y presunción o certeza de que entre los mismos efectivos policiales y militares se encuentran tratantes.

“Las redes de tratas de personas están tan bien conectadas que saben cada vez que va a haber una deportación, están muy atentas, saben a quién están regresando y hacen presión. Por eso uno trata de movilizarlas rápido y de resguardarlas”, dijo una de las personas consultadas.

También hay reportes desde la entidad de que efectivos de seguridad del Estado realizarían procedimientos irregulares en las deportaciones de Trinidad y Tobago hacia Venezuela por el puerto de Güiria, las víctimas supuestamente son robadas por funcionarios de la propia Guardia Nacional Bolivariana (GNB), les quitan sus teléfonos y otras pertenencias.

De acuerdo a las entrevistas realizadas se identificó que las instituciones que estarían vinculadas o serían permisivas ante las situaciones de esclavitud moderna son la Guardia Costera, Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado y Bolivariana de Puertos, a través del Puerto de Guanta.

Sin confianza en la justicia. Entre los casos de trata que han sido identificados por entes oficiales en Venezuela destaca el de una joven de 17 años de edad que fue deportada desde Puerto España, Trinidad y Tobago, hacia Güiria en enero de 2022. Según declaró a los funcionarios, ella salió de Venezuela en octubre de 2021 acompañada de un primo. A mitad del trayecto, la guardia costera de Trinidad y Tobago interceptó la embarcación en la que viajaba y los detuvo en el helipuerto de Chaguaramas durante dos meses. Allí se enteró de que su primo la había vendido a otro venezolano que ya estaba en Trinidad y Tobago, quien presuntamente tenía la intención de volver a venderla.

La joven denunció el caso ante una organización de trata de personas en Trinidad y Tobago y tanto el primo como el otro venezolano fueron detenidos en una cárcel de máxima seguridad. No obstante, no fueron procesados y al poco tiempo los deportaron a Venezuela. Al llegar al país quedaron en libertad, uno estaba en Tucupita y otro en Caracas. La joven hizo la denuncia en Venezuela y la Defensoría del Pueblo alertó al Ministerio Público para emitir una orden de aprehensión en contra de los dos hombres. No se tiene información si los hombres fueron o no detenidos.

A medida que los casos de trata de personas por Güiria han cobrado más relevancia y organizaciones internacionales han comenzado a trabajar en la zona, algunos grupos delictivos comenzaron a migrar sus actividades. Hay reportes de personas del mismo estado Sucre que están siendo sacadas del país por Colombia por las mismas redes de trata.



Distorsiones económicas

Bajo su propio riesgo. El poder de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas es tal que han logrado desplazar a muchos industriales y comerciantes formales que hacían vida en el estado Sucre. La producción agrícola, la pesca y el negocio del turismo también han sufrido las consecuencias.

En el negocio del cacao, los productores se ven en la obligación de pagar “vacuna” o extorsiones a las organizaciones criminales y a trabajar bajo sus órdenes. El precio en el que deben vender su producción depende de lo que dispongan los líderes de estos grupos delictivos que muchas veces son conocidos como el gobierno de la zona.

En la vía hacia Güiria es común encontrar casas vacías que antes servían para alojar a turistas, pero que fueron abandonadas por sus dueños por las presiones ejercidas por las organizaciones criminales. Pasa lo mismo con galpones que eran usados para guardar mercancía y con locales que servían para el comercio. La inauguración de nuevos negocios

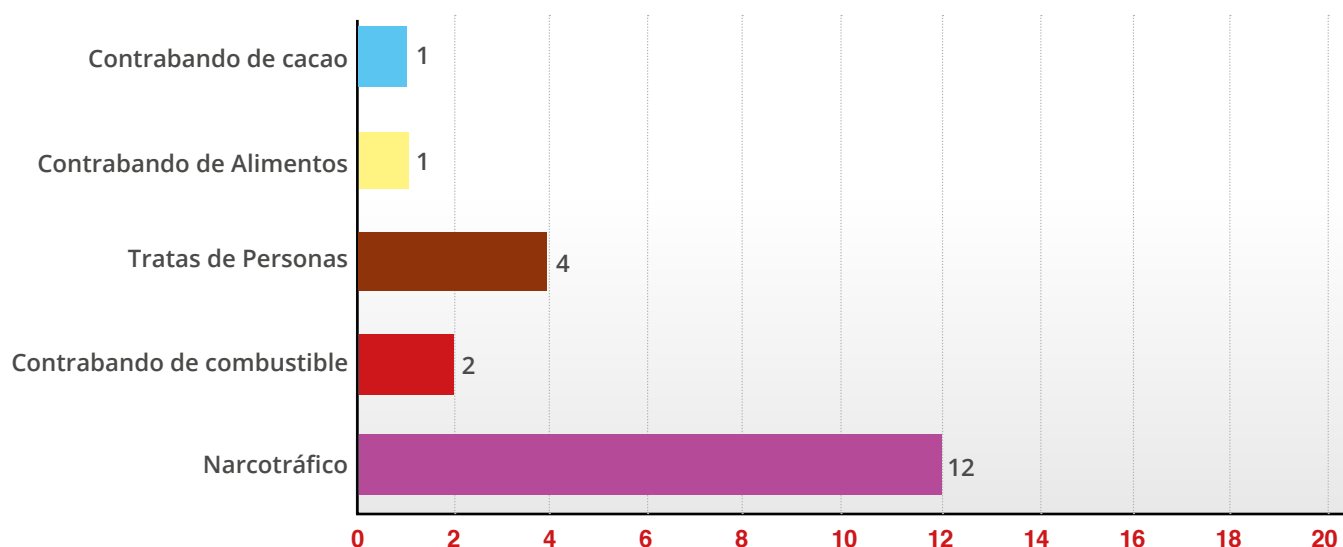
y el mantenimiento de los que existen está supeditado al pago de vacuna que imponen los grupos delictivos.

El cierre de industrias y comercios formales contribuye con los elevados niveles de pobreza que hay en el estado y hace que en muchos casos las actividades ilícitas se conviertan en la única fuente de empleo para jóvenes de comunidades vulnerables.

La cercanía de los estados Sucre y Bolívar, así como la salida marítima del primero, ha facilitado la operación de economías ilícitas entre ambas entidades y el despliegue de grupos de crimen organizado. Fuentes entrevistadas en el estado Sucre reportaron que muchas mujeres y hombres jóvenes de zonas pobres son captados por grupos de crimen organizado dedicados a la producción ilegal de oro en los pueblos mineros del sur del estado Bolívar para ser explotados laboral o sexualmente.

Aunque en el estado Sucre son pocos los medios de comunicación independientes que resisten, el rastreo realizado para esta investigación entre 2022 y el primer semestre de 2023 permitió identificar 25 noticias en las que destacan las siguientes economías ilícitas.

CANTIDAD DE ILÍCITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO SUCRE SEGÚN NOTICIAS Y REPORTES





Distorsiones sociales y culturales

Un negocio que no cesa. Para los que van de visita al estado Sucre hay una advertencia clara. “Te puedes mover por Cumaná y llegar hasta Carúpano, pero no vayas más allá. Si lo haces es bajo tu propio riesgo”.

Las organizaciones criminales dedicadas a las actividades ilícitas han logrado imponer reglas hasta de circulación que han sido naturalizadas por los pobladores. Para ingresar a las zonas más peligrosas hay que conseguir el permiso de los líderes de las bandas, de lo contrario nadie garantiza la libre circulación o la seguridad.

Los pobladores del estado Sucre han dejado de ir a varias de las playas más bellas de la entidad por la presencia de los grupos criminales. Incluso hay familias que desde hace mucho no se visitan por las limitaciones impuestas por estas organizaciones. “A San Juan de las Galdonas hace mucho que no se puede ir, es tentar demasiado tu suerte porque ahí no hay gobierno. Ahí solo operan los criminales y no hay quien te defienda”, afirma la directora de una organización de la sociedad civil en la entidad.

Como sucede en otras regiones del país, las bandas dedicadas a las economías ilícitas en Sucre han intentado conseguir el respaldo de algunos pobladores a través de labores

sociales. Distribuyen alimentos, medicinas y otros materiales para la salud e impulsando actividades deportivas.

Fuentes entrevistadas en la región aseguran que algunos líderes criminales se venden como unos “Robin Hood”. En las zonas en las que operan ayudan a los pobladores a alimentarse y cubrir sus demás necesidades básicas. Pero no aceptan la llegada de externos. Existen códigos de los criminales para comunicarse entre sí y con los locales, como escribir letreros con errores ortográficos intencionados para transmitir un mensaje.

La entrega de “ayudas sociales” ha llevado a algunos pobladores a sentir afinidad y hasta admiración por los líderes criminales. Sienten que, en medio de la crisis, tener a alguien que los ayude económicamente es motivo suficiente para conseguir su aprobación. “El estado Sucre es muy pobre, pero en zonas como Güiria hay mucho poder adquisitivo. A veces ves una casa sencilla, pero adentro está muy moderna y con productos que no consigues en otras partes”, agregó un integrante de una organización con sede en esa zona.

Las supuestas ventajas económicas son ofrecidas por algunas bandas criminales para conseguir captar a más personas. Recurren a zonas vulnerables, donde los padres no tienen mucho control sobre sus hijos jóvenes y se los llevan para delinquir o para ser vendidas a redes de trata con fines de explotación sexual.








El perfil de las víctimas de trata no siempre es el mismo, hay desde adolescentes menores de 15 años de edad hasta mujeres que pasan los 35 años de edad. Hay mujeres que saben para qué están siendo llevadas, pero creen que podrán decidir qué hacer, cuándo y por cuánto tiempo, contrario a lo que termina sucediendo.

“Las bandas que participan en estas actividades están muy bien organizadas, incluye la gente que capta en las zonas más pobres del estado, como La Llanada, Bebedero, Brasil, San Vicente de Paúl y el municipio Cruz Salmerón Acosta, incluso de otros estados de Venezuela como Carabobo, Delta Amacuro y Monagas, hasta las personas que se encargan del traslado y las que reciben”, dijo una de las personas que trabaja en la zona.

Otra característica encontrada, especialmente de las víctimas menores de edad es que provienen de hogares donde no hay padres que velen por ellas y son sometidas a abusos desde pequeñas, presencia de niñez abandonada y desnutrición. También hay mucha deserción escolar, lo que contribuye a la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

Debido a ese contexto, las organizaciones han encontrado medios de captación a la trata de personas como el rapto por medio de uso de estupefacientes que agregan a las comidas ofrecidas a personas en condición de vulnerabilidad.

DISTORSIONES EN EL ESTADO SUCRE	
TIPO	DISTORSIONES REGISTRADAS
 INSTITUCIONALES	<ul style="list-style-type: none">• Desconfianza hacia las instituciones públicas.• Inacción de las autoridades judiciales y organismos de seguridad.• Pocas denuncias ante las autoridades por temor a los grupos delictivos.• Organizaciones criminales aliados a altos dirigentes políticos y a efectivos de cuerpos de seguridad y defensa.• Permisividad de los cuerpos de seguridad del Estado.• Operativos de seguridad discrecionales.• No existe un sistema de atención integral a las víctimas.
 ECONÓMICAS	<ul style="list-style-type: none">• El narcotráfico desplazó a industriales y comerciantes.• Caída de la actividad turística y pesquera.
 SOCIALES	<ul style="list-style-type: none">• La movilidad en las zonas tomadas por el narcotráfico la determinan los grupos delictivos.• Existen poblaciones enteras están dominadas por el crimen.• Hay migración forzada a otros estados o hacia otras naciones (principalmente Trinidad y Tobago) por situación de miseria y la acción criminal desbordada.• Muchos adultos acceden a estas tramas sin medir el poder y estructura de estos grupos delictivos.• Reclutamiento de jóvenes por las bandas criminales principalmente en poblaciones de la península de Paria.



CONCLUSIONES

En el presente informe se muestra una larga, compleja y profunda incidencia de las economías ilícitas en todos los sectores analizados, produciendo distorsiones de diferente intensidad en cada región de Venezuela. Todos ellos exigen la atención de los organismos responsables del Estado y la vigilancia de la sociedad venezolana.

Una vez analizadas las noticias e informes relacionados con las economías ilícitas y las redes criminales de los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira y Zulia, es posible extraer algunas conclusiones.

- a. El narcotráfico es el ilícito que se observa con mayor frecuencia en los estados analizados, con la excepción del tráfico ilegal de oro en Bolívar. Este delito sigue amenazando la gobernabilidad del Estado y el bienestar de la sociedad, ya que posee importantes recursos económicos, armamento y cada vez más territorio bajo su control.
- b. La trata de personas se ha venido incrementando de una manera alarmante en los últimos dos años. El ilícito se identificó en los estados analizados.
- c. El contrabando de combustible ha disminuido como consecuencia del alza de su precio en el mercado local. El contrabando se incrementa en los momentos de escasez, desde Colombia hacia Venezuela.
- d. El contrabando de chatarra se ha convertido en un “nuevo negocio”.
- e. El contrabando de alimentos y productos terminados incrementa su presencia entre los tipos de economías ilícitas perpetradas en Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia.
- f. Los delitos registrados, en su mayoría, fueron vinculados con la existencia de grupos del crimen organizado o grupos irregulares y funcionarios públicos corruptos. En el caso de trata de personas se identificaron algunas individualidades, pero no se obtuvo información acerca de su posible vinculación con redes criminales.
- g. En los estados evaluados, se identificó que los delitos de economía negra afectan más a mujeres y niñas, y a algunas comunidades indígenas.
- h. Se presume, a partir de la lectura de las noticias e informes registrados, que detrás de los delitos de economía ilícita hay corrupción.
- i. Algunos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) son señalados como presuntos colaboradores en actividades ilícitas, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército.
- j. En Zulia y Bolívar se informa sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
- k. En noticias y reportes del estado Zulia, se informa acerca de la presencia en Venezuela del Cartel de Sinaloa, el de Jalisco, ambos de origen mexicano, además del Clan del Golfo colombiano. Sin embargo, en la visita de campo fue el Cartel de Sinaloa el más mencionado por las fuentes.
- l. En Zulia se identificó la actuación del Cartel de Sabana Alta de Falcón y el grupo delictivo “Los Coyotes”, estos grupos no habían sido identificados en el trabajo Economías ilícitas al amparo de la corrupción (Transparencia Venezuela 2022). Así como el Motor de Guayana y la banda “Los Pescadores” en el estado Bolívar.



- m. Los llamados TANCOL son grupos permanentemente señalados. El principal vocero del gobierno sobre acciones contra el crimen organizado, el general Domingo Hernández Lárez, comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), usa sus redes sociales para informar los operativos militares, pero sin identificar a las personas detenidas, ni lugares concretos en los estados que se realizan.
- n. Las economías ilícitas afectan la institucionalidad de Venezuela. Las distorsiones más importantes que se señalan son la corrupción de los funcionarios públicos, la tolerancia y las arbitrariedades por parte de las autoridades militares y organismos de seguridad ante la presencia de grupos irregulares; la débil política de fronteras por parte de Venezuela y la falta de credibilidad y confianza en las autoridades e instituciones públicas. Esto último significa un peligro para la gobernabilidad y sostenibilidad del sistema democrático.
- o. En el ámbito económico, las economías ilícitas y la existencia de redes criminales provocan el crecimiento de la economía informal, la evasión fiscal, el contrabando de bienes, la erosión del tejido formal de la economía, el crecimiento de modelos de negocios ilegítimos y el lavado de dinero.
- p. Desde el punto de vista social, una mayor descomposición en la sociedad y pérdida de valores; degradación de las condiciones de vida; incorporación de grupos socialmente vulnerables a actividades delictivas, incluyendo a indígenas; crecimiento de poblaciones pobres, de la esclavitud laboral y de la prostitución; sometimiento social; desplazamiento de familias; alto índice de consumo de drogas; apología de figuras de las redes criminales y la ocupación de territorios por grupos irregulares.
- q. La participación de bandas criminales en la vida política y en programas sociales; la relación de algunos militantes del partido de gobierno con el crimen organizado y el apoyo de dirigentes políticos a grupos dedicados al narcotráfico, son distorsiones políticas que está profundizando la actuación del crimen organizado.
- r. En el aspecto económico, las economías ilícitas facilitan la evasión fiscal, hay una disminución de la inversión privada, se afianza el narcotráfico como actividad muy lucrativa, la economía informal se impone a la formal, se profundiza la legitimación de capitales y los mercados paralelos ilegales sin control alguno, y aumenta la informalidad del intercambio comercial e industrial.
- s. La acción de los grupos armados irregulares y los delitos que cometen producen cambios en los modos de vida y costumbres de las comunidades donde actúan, las personas se adecuan a las reglas de juegos establecidas por las organizaciones criminales: cambian sus rutinas, caminos, horarios, y hasta la manera de hablar.



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela